CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE

Sesión del Pleno

celebrada el martes, 2 de diciembre de 1997

ORDEN DEL DÍA:

Primero

- Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 18 y 19 de noviembre de 1997.

Segundo

Peticiones de creación de Comisiones Especiales:

- Petición de creación de una Comisión Especial sobre los objetivos que debe seguir el proceso de desarrollo económico y social en el conjunto del Estado español, considerando la trayectoria realizada y la necesidad de estimular la participación y su máximo rendimiento social. (Primer firmante: don Joaquim Ferrer i Roca) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 328, de fecha 14 de noviembre de 1997) (Número de expediente 650/000005).

Tercero

Mociones consecuencia de Interpelación:

- Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a la adopción de medidas normativas y administrativas tendentes a la integración de los inmigrantes en la sociedad española (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 344, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente 671/000033).

Cuarto

Mociones:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al Gobierno a impulsar un plan de mejora de las enseñanzas de las humanidades en la educación secundaria, a proseguir el proceso de elabora-

ción del proyecto de Real Decreto de reforma de las enseñanzas mínimas de ciencias sociales, geografía e historia, lengua castellana y literatura en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), a adoptar todas las iniciativas conducentes a alcanzar un deseable acuerdo en esta cuestión, y a intensificar, en el seno de la Conferencia de Educación, la consulta y participación de las Comunidades Autónomas en el desarrollo de las restantes fases del plan de mejora de las humanidades (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 344, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente 662/000102).

- Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno para que, en el plazo de tres meses previa negociación con los Agentes Sociales, apruebe el Plan Nacional de Seguridad Minera (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 344, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente 662/000103).
- Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por la que se insta al Gobierno a presentar un plan de financiación en dos anualidades de las necesidades municipales que aún están por cubrir en los distintos Planes de Emergencia Nuclear existentes en el Estado español (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 344, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente 662/000101).

Quinto

Conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios Internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados:

- Declaración prevista en el artículo 14 de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (Nueva York, 7 de marzo de 1966). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 139, de fecha 14 de noviembre de 1997) (Número de expediente S. 610/000139) (Número de expediente C. D. 110/000140).
- Convenio Básico de Cooperación Científico-Técnica entre el Reino de España y la República de Haití, firmado «ad referéndum» en Puerto Príncipe el 8 de mayo de 1991, y Canje de Notas de 4 y 16 de octubre de 1995 que lo modifica (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 118, de fecha 14 de noviembre de 1997) (Número de expediente S. 610/000118) (Número de expediente C. D. 110/000117).
- Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos (Protocolo enmendado II), adoptado en Ginebra el 3 de mayo de 1996, de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados de 1980 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 119, de fecha 14 de noviembre de 1997) (Número de expediente S. 610/000119) (Número de expediente C. D. 110/000118).
- Protocolo adicional a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados «Protocolo sobre armas láser cegadoras», Protocolo IV, adoptado en Viena el 13 de octubre de 1995 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 120, de fecha 14 de noviembre de 1997) (Número de expediente S. 610/000120) (Número de expediente C. D. 110/000119).
- Enmienda al artículo 15 del Acuerdo de explotación relativo a la Organización Europea de Telecomunicaciones por Satélite (EUTELSALT), adoptada en París el 21 de febrero de 1996 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 121, de fecha 14 de noviembre de 1997) (Número de expediente S. 610/000121) (Número de expediente C. D. 110/000120).
- Convenio Europeo sobre televisión transfronteriza, hecho en Estrasburgo el 5 de mayo de 1989 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 122, de fecha 14 de noviembre de 1997) (Número de expediente S. 610/000122) (Número de expediente C. D. 110/000121).
- Declaración de Aceptación por España de la adhesión de Islandia al Convenio de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (La Haya 25/10/80) (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 123, de fecha 14 de noviembre de 1997) (Número de expediente S. 610/000123) (Número de expediente C. D. 110/000124).
- Convenio de extradición entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado en Madrid el 30/05/97 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 124, de fecha 14 de noviembre de 1997) (Número de expediente S. 610/000124) (Número de expediente C. D. 110/000125).

- Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado en Madrid el 30/05/97 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 125, de fecha 14 de noviembre de 1997) (Número de expediente S. 610/000125) (Número de expediente C. D. 110/000126).
- Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la asistencia de personas detenidas y al traslado de personas condenadas, firmado en Madrid el 30 de mayo de 1997 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 126, de fecha 14 de noviembre de 1997) (Número de expediente S. 610/000126) (Número de expediente C. D. 110/000127).
- Convenio de cooperación judicial en materia civil, mercantil y administrativa entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado en Madrid el 30 de mayo de 1997 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 127, de fecha 14 de noviembre de 1997) (Número de expediente S. 610/000127) (Número de expediente C. D. 110/000128).
- Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre asistencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia de derecho de custodia y derecho de visita y devolución de menores, firmado en Madrid el 30 de mayo de 1997 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 128, de fecha 14 de noviembre de 1997) (Número de expediente S. 610/000128) (Número de expediente C. D. 110/000129).
- Convenio de cooperación judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de Colombia, firmado en Bogotá el 29 de mayo de 1997 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 129, de fecha 14 de noviembre de 1997) (Número de expediente S. 610/000129) (Número de expediente C. D. 110/000130).
- Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República de El Salvador, firmado en Madrid el 10 de marzo de 1997 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 130, de fecha 14 de noviembre de 1997) (Número de expediente S. 610/000130) (Número de expediente C. D. 110/000131).
- Convenio de cooperación judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de El Salvador, firmado en Madrid el 10 de marzo de 1997 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 131, de fecha 14 de noviembre de 1997) (Número de expediente S. 610/000131) (Número de expediente C. D. 110/000132).
- Convenio entre los Estados Parte del Tratado del Atlántico Norte y los otros Estados participantes en la Asociación para la Paz, relativo al Estatuto de sus Fuerzas y Protocolo Adicional al mismo, hechos en Bruselas el 19 de junio de 1995, así como reserva que el Gobierno español va a formular en el momento de su ratificación (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 132, de fecha 14 de noviembre de 1997) (Número de expediente S. 610/000132) (Número de expediente C. D. 110/000133).
- Acuerdo entre el Gobierno de la República de Albania y los Gobiernos de las Naciones contribuyentes a la Fuerza Multinacional de Protección, relativo al Estatuto de dicha Fuerza, hecho en Roma el 21 de abril de 1997 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 133, de fecha 14 de noviembre de 1997) (Número de expediente S. 610/000133) (Número de expediente C. D. 110/000134).
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de El Salvador sobre Transporte Aéreo, firmado en Madrid el 10 de marzo de 1997 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 134, de fecha 14 de noviembre de 1997) (Número de expediente S. 610/000134) (Número de expediente C. D. 110/000135).
- Convenio entre el Reino de España y la República Portuguesa para la construcción de un puente internacional sobre el río Manzanás, entre las localidades de San Martín de Pedroso (España) y Quintanilha (Portugal), firmado en Madrid el 24 de junio de 1997 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 135, de fecha 14 de noviembre de 1997) (Número de expediente S. 610/000135) (Número de expediente C. D. 110/000136).
- Convenio entre el Reino de España y la República Portuguesa para la construcción de un puente internacional sobre el río Tâmega, entre las localidades de Feces de Abaixo (España) y Vila Verde da Raia (Portugal), firmado en Madrid el 24 de junio de 1997 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 136, de fecha 14 de noviembre de 1997) (Número de expediente S. 610/000136) (Número de expediente C. D. 110/000137).
- Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Rumanía sobre la modificación del Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la República Socialista de Rumanía y Ane-

xo, firmado en Madrid el 10 de enero de 1980 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 137, de fecha 14 de noviembre de 1997) (Número de expediente S. 610/000137) (Número de expediente C. D. 110/000138).

- **Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Uruguay sobre la modificación del Acuerdo sobre Transporte Aéreo Comercial entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay, firmado en Montevideo el 13 de agosto de 1979 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 138, de fecha 14 de noviembre de 1997) (Número de expediente S. 610/000138) (Número de expediente C. D. 110/000139).**

Sexto

Toma en consideración de Propositiones de Ley del Senado:

- **Proposición de Ley de modificación de la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, de bases del Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias (Autor: Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos) (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-A, número 7, de fecha 4 de marzo de 1997) (Número de expediente 622/000007).**

SUMARIO

Se abre la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.

	Página
Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 18 y 19 de noviembre de 1997	2808

Se aprueban las Actas.

	Página
PETICIONES DE CREACIÓN DE COMISIONES ESPECIALES	2808

	Página
Petición de creación de una Comisión Especial sobre los objetivos que debe seguir el proceso de desarrollo económico y social en el conjunto del Estado español, considerando la trayectoria realizada y la necesidad de estimular la participación y su máximo rendimiento social. (Primer firmante: D. Joaquim Ferrer i Roca)	2808

El señor Ferrer i Roca defiende la creación de la comisión especial. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Nieto Cicuéndez, por el Grupo Mixto, y Gangoiti Llaguno por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, así como la señora Martín i Vigil, por el Grupo Socialista, y el señor Alier-ta Izuel, por el Grupo Popular.

Se aprueba la creación de la comisión especial por asentimiento de la Cámara.

	Página
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN	2811

	Página
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a la adopción de medidas normativas y administrativas tendentes a la integración de los inmigrantes en la sociedad española ..	2811

El señor Oliart Pons defiende la moción. La señora San Baldomero Ochoa defiende una enmienda a la moción del Grupo Popular. Vuelve a intervenir el señor Oliart Pons. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Román Clemente, por el Grupo Mixto; Caballero Lasquibar, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y Capdevila i Bas, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergencia i Unió.

Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 103 votos a favor y 125 en contra.

	Página
MOCIONES	2815

	Página
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al Gobierno a impulsar un plan de mejora de las enseñanzas de las humanidades en la educación secundaria, a proseguir el proceso de elaboración del proyecto de Real Decreto de reforma de las enseñanzas mínimas de ciencias sociales, geografía e historia, lengua castellana y literatura en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), a adoptar todas las iniciati-	

vas conducentes a alcanzar un deseable acuerdo en esta cuestión, y a intensificar, en el seno de la Conferencia de Educación, la consulta y participación de las Comunidades Autónomas en el desarrollo de las restantes fases del plan de mejora de las humanidades 2815

El señor Fernández Rozada defiende la moción. El señor Presidente anuncia la presentación de una propuesta de modificación, firmada por varios Grupos Parlamentarios. El señor Ríos Pérez defiende una enmienda a la moción, del Grupo Mixto. El señor Iglesias Marcelo defiende una enmienda a la moción, del Grupo Socialista. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Román Clemente y la señora De Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto, y los señores Albistur Marín, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Varela i Serra, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Iglesias Marcelo, por el Grupo Socialista, y Fernández Rozada, por el Grupo Popular.

Se aprueba la propuesta de modificación por 207 votos a favor, 20 en contra y 4 abstenciones.

Página

Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno para que, en el plazo de tres meses, previa negociación con los Agentes Sociales, apruebe el Plan Nacional de Seguridad Minera 2826

El señor Alonso Buitrón defiende la moción. El señor Martínez Oblanca defiende una enmienda a la moción, del Grupo Popular. El señor Presidente comunica a la Cámara la existencia de una propuesta de modificación, firmada por todos los Grupos Parlamentarios. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Nieto Cicuéndez, por el Grupo Mixto; Albistur Marín, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Simó i Burgues, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Alonso Buitrón, por el Grupo Socialista.

Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de la Cámara.

Página

Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, por la que se insta al Gobierno a presentar un plan de financiación, en dos anualidades, de las necesidades municipales que aún están por cubrir en los distintos Planes de Emergencia Nuclear existentes en el Estado español 2831

El señor Roig i Grau defiende la moción. El señor Presidente anuncia la presentación de una propuesta de modificación, firmada por todos los Grupos Parlamentarios. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Albistur Marín, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Roig i Grau, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Sánchez Lucas, por el Grupo Socialista, y Tome y Gómez, por el Grupo Popular.

Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de la Cámara.

Página

CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 2836

Página

Declaración prevista en el artículo 14 de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (Nueva York, 7 de marzo de 1966) SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA 2836

Los señores Cobo Fernández y Soravilla Fernández consumen un turno a favor. Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.

Página

Convenio Básico de Cooperación Científico-Técnica entre el Reino de España y la República de Haití, firmado «ad referendum» en Puerto Príncipe el 8 de mayo de 1991, y Canje de Notas de 4 y 16 de octubre de 1995 que lo modifica 2837

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.

Página

Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos (Protocolo enmendado II), adoptado en Ginebra el 3 de mayo de 1996, de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados de 1980 2837

El señor Soravilla Fernández consume un turno a favor. Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.

Página

Protocolo adicional a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, «Protocolo sobre armas láser cegadoras», Protocolo IV, adoptado en Viena el 13 de octubre de 1995 2838

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.

Página

Enmienda al artículo 15 del Acuerdo de explotación relativo a la Organización Europea de Telecomunicaciones por Satélite (EUTELSAT), adoptada en París el 21 de febrero de 1996 2838

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.

Página

Convenio Europeo sobre televisión transfronteriza, hecho en Estrasburgo el 5 de mayo de 1989 2838

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.

Página

Declaración de Aceptación por España de la adhesión de Islandia al Convenio de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (La Haya, 25/10/80) 2839

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.

Convenio de extradición entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado en Madrid el 30/05/97 2839

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.

Página

Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado en Madrid el 30/05/97 2839

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.

Página

Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la asistencia de personas detenidas y al traslado de personas condenadas, firmado en Madrid el 30 de mayo de 1997 2839

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.

Página

Convenio de cooperación judicial en materia civil, mercantil y administrativa entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado en Madrid el 30 de mayo de 1997 2839

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.

Página

Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre asistencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia de derecho de custodia y derecho de visita y devolución de menores, firmado en Madrid el 30 de mayo de 1997 2839

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.

	Página	<i>No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.</i>	
Convenio de cooperación judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de Colombia, firmado en Bogotá el 29 de mayo de 1997	2839		Página
<i>No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.</i>			
	Página	Acuerdo entre el Reino de España y la República de El Salvador sobre Transporte Aéreo, firmado en Madrid el 10 de marzo de 1997	2840
Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República de El Salvador, firmado en Madrid el 10 de marzo de 1997	2840	<i>No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.</i>	
<i>No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.</i>			Página
	Página	Convenio entre el Reino de España y la República Portuguesa para la construcción de un puente internacional sobre el río Manzanas, entre las localidades de San Martín de Pedroso (España) y Quintanilha (Portugal), firmado en Madrid el 24 de junio de 1997	2841
Convenio de cooperación judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de El Salvador, firmado en Madrid el 10 de marzo de 1997	2840	<i>No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.</i>	
<i>No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.</i>			Página
	Página	Convenio entre el Reino de España y la República Portuguesa para la construcción de un puente internacional sobre el río Támeaga, entre las localidades de Feces de Abaixo (España) y Vila Verde da Raia (Portugal), firmado en Madrid el 24 de junio de 1997	2841
Convenio entre los Estados Parte del Tratado del Atlántico Norte y los otros Estados participantes en la Asociación para la Paz, relativo al Estatuto de sus Fuerzas y Protocolo Adicional al mismo, hechos en Bruselas el 19 de junio de 1995, así como reserva que el Gobierno español va a formular en el momento de su ratificación	2840	<i>No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.</i>	
<i>El señor Román Clemente consume un turno en contra. Se aprueba el convenio por 193 votos a favor y 4 en contra, autorizándose al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.</i>			Página
	Página	Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Rumanía sobre la modificación del Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la República Socialista de Rumanía y Anexo, firmado en Madrid el 10 de enero de 1980	2841
Acuerdo entre el Gobierno de la República de Albania y los Gobiernos de las Naciones contribuyentes a la Fuerza Multinacional de Protección, relativo al Estatuto de dicha Fuerza, hecho en Roma el 21 de abril de 1997	2840	<i>No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.</i>	

Página

Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Uruguay sobre la modificación del Acuerdo sobre Transporte Aéreo Comercial entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay, firmado en Montevideo el 13 de agosto de 1979 2841

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.

Página

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO ..

Página

Proposición de Ley de modificación de la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, de bases del Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias. (Autor: Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos).....

Queda aplazada la toma en consideración.
Se levanta la sesión a las veinte horas y diez minutos.

Se abre la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Se abre la sesión.

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES, CELEBRADAS LOS PASADOS DÍAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 1997:

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El primer punto de orden del día es la lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 18 y 19 de noviembre de 1997. ¿Se dan por leídas y por aceptadas? (*Pausa.*) Gracias.

PETICIONES DE CREACIÓN DE COMISIONES ESPECIALES:

— **PETICIÓN DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE LOS OBJETIVOS QUE DEBE SEGUIR EL PROCESO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN EL CONJUNTO DEL ESTADO ESPAÑOL, CONSI-**

DERANDO LA TRAYECTORIA REALIZADA Y LA NECESIDAD DE ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN Y SU MÁXIMO RENDIMIENTO SOCIAL (650/000005).

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Segundo punto del orden del día: Peticiones de creación de comisiones especiales. Petición de creación de una comisión especial sobre los objetivos que debe seguir el proceso de desarrollo económico y social en el conjunto del Estado español, considerando la trayectoria realizada y la necesidad de estimular la participación y su máximo rendimiento social.

Para su defensa, tiene la palabra el Senador don Joaquim Ferrer.

El señor FERRER I ROCA: Señor Presidente, señorías, el 22 de octubre, hace unas semanas, tuve el honor en el Pleno del Senado de presentar una interpelación al Gobierno sobre las previsiones que tenía con referencia a cómo continuar el desarrollo económico y social iniciado hace ya aproximadamente veinte años. Me contestó el señor Vicepresidente Primero. En el curso del debate que siguió con motivo de la interpelación, se suscitó el posible interés de crear una comisión especial de estudio sobre qué criterios y qué objetivos hay que seguir en los próximos años para continuar y acrecentar, naturalmente, el desarrollo económico y social. Esta es la razón que motiva la presentación formal de creación de esta comisión.

En resumen, en los últimos veinte años transcurridos han existido dos factores que, de alguna manera, han contribuido extraordinariamente a la transformación económica y social. Por un lado, el régimen de autonomías políticas y, por otro, la preocupación de que existiera un crecimiento que todos calificamos de armónico. Ha existido la preocupación de que el crecimiento que se producía no fuese cualquiera, sino que fuese de tipo social, cultural, económico y político. Estos dos parámetros han estado y están presentes en el desarrollo económico y social en el conjunto del Estado español.

Después de aquella interpelación, ¿qué cabía hacer? ¿Un simple balance o unas propuestas? Lo más operativo fue proponer la creación de esta comisión de estudio. Esta comisión especial de Estudio tendrá, naturalmente, que realizar un trabajo previo análisis de la situación actual. La situación actual puede caracterizarse, señorías, por dos grandes factores. Por un lado, se han reducido extraordinariamente las carencias históricas que teníamos en los campos de la sanidad, transporte, comunicaciones, educación, servicios sociales y vivienda. Y, por otro lado, es indudable que existe un nivel importante en el campo de las infraestructuras en su conjunto.

La pregunta que surge es la siguiente: ¿qué debemos hacer en los próximos años? ¿Cómo podemos continuar realizando este esfuerzo de desarrollo económico y social? A partir de las autonomías y del considerable aumento de las infraestructuras que ya existen. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacerlo? Esta es la pregunta

que deberá contestar la comisión especial de estudio sobre el desarrollo económico y social en los próximos años. Para ello, la comisión tendrá —así lo sugiere este portavoz del Grupo Convergència i Unió—, previsiblemente, que hacer —insisto— un balance de los últimos veinte años. Tendrá que analizar cuál es la situación actual. Tendrá que ver qué rendimiento social se extrae de las infraestructuras de que ya disponemos. Finalmente, la Comisión tendrá que culminar su trabajo con unas propuestas de acción para los próximos años.

En realidad, la comisión especial de estudio se justifica, desde nuestro punto de vista, por este último apartado. Lo más interesante de esta comisión especial van a ser las propuestas de acción porque es evidente que en los próximos años el desarrollo económico y social no debe repetir simplemente lo que ya se ha hecho. No podemos duplicar infraestructuras ya existentes. No podemos eliminar carencias que ya hemos eliminado. Hay que proponer algunas iniciativas nuevas, sobre todo, con la intención de profundizar y extraer más rendimiento social a las infraestructuras existentes y a las venideras.

Estas son las motivaciones que justifican plenamente la propuesta de creación de una comisión especial de estudio que analice qué líneas debe seguir el desarrollo económico y social en los próximos años en el conjunto del Estado español a partir de la situación creada. Esta es una propuesta que cuenta con el apoyo de Senadores de todos los grupos porque es una necesidad sentida por todos. Es una iniciativa en la que hemos puesto grandes esperanzas que no debe contribuir simplemente a la creación de infraestructuras, sino al aprovechamiento social en este punto al cual hemos llegado en los próximos años.

Éste es el objetivo: potenciar y adecuar la acción de desarrollo económico y social a los parámetros que hoy tenemos, consiguiendo que a través de las infraestructuras ya creadas y las que se derivarán de ellas se produzca realmente un crecimiento muy superior al que hasta ahora hemos tenido, crecimiento que consideramos será posible conseguir —insisto en ello— con el grado de infraestructuras existente y con las que posteriormente habrá.

Pero sobre la creación de esta Comisión Especial plantea una pregunta puesto que es evidente que no hemos de repetir exactamente lo que hemos venido haciendo en los últimos veinte años en este campo: ¿Qué debemos hacer? A esta pregunta deberá contestar esta Comisión Especial de estudio cuya creación presentamos a la consideración de esta Cámara.

Muchas gracias, señor Presidente, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Ferrer.

De no haber turno en contra pasamos al turno de portavoces.

Tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.

El señor NIETO CICUÉNDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Con mucha brevedad quisiera decir que apoyamos esta iniciativa. Consideramos que ésta es una iniciativa loable e interesante e, indudablemente, en esta Cámara estamos en condiciones de hacer entre todos ese estudio, estableciendo, como decía el señor Ferrer i Roca, nuestra propia proyección de cara al futuro a este respecto. Es indudable que en este punto habrá diferentes matices entre cada uno de nosotros, pero, en definitiva, creo que el objetivo es interesante y loable, repito, razón por la cual vamos a apoyar esta iniciativa.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Nieto.

Tiene la palabra el Senador Gangoiti.

El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.

Quisiera muy brevemente y desde el escaño, no solamente sumarme en nombre de mi Grupo a la iniciativa que ha presentado el Grupo Catalán, sino felicitar a todos sus miembros por la misma. Creemos que era algo realmente necesario.

Como decía el portavoz del Grupo Catalán, han pasado ya veinte años, y a lo largo de ellos se ha producido una evolución importante. Por ello, es necesario que miremos hacia el futuro; es necesario que nuestra sociedad, ahora que se habla tanto de ello en Europa, mire hacia una convergencia económica y social; es también importante que miremos hacia una convergencia dentro de la pluralidad cultural que existe, y es asimismo necesario que en esta Comisión Especial se hagan una serie de formulaciones sobre un tema que hoy está muy de actualidad: el futuro del Estado del bienestar.

En consecuencia, nuestro Grupo Parlamentario está completamente de acuerdo en que se cree esta Comisión.

Y acabo diciendo lo mismo que dije al principio. Felicito al Grupo Catalán por esta iniciativa que creemos puede ser realmente importante.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Gangoiti.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra la Senadora Francesca Martín i Vigil.

La señora MARTÍN I VIGIL: Gracias, señor Presidente.

Señorías, ésta es una propuesta consecuencia de la interpelación que debatimos en esta Cámara el día 22 de octubre, como consecuente es también la posición de todos y cada uno de los grupos, incluido el nuestro, no sólo en cuanto a la aceptación de la constitución de esta comisión especial, sino en lo que se refiere a un posicionamiento de vivo interés en relación con que se haga un seguimiento importante de esta comisión.

Entendemos que el planteamiento que hace el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió por boca de su portavoz, el Senador don Joaquim

Ferrer, es muy ambicioso e interesante, planteamiento que, de todas maneras, necesitará de una limitación para poder abarcar realmente temas de tanto interés como son todos los que conforman aquello que hemos dado en llamar el Estado del bienestar.

Cuando el Senador Ferrer i Roca interpelló al Gobierno sobre sus intenciones para cubrir la nueva fase necesaria en la consolidación del desarrollo económico y social, éste, por boca de su Vicepresidente Primero, explicitó aquí de forma muy prolija sus prioridades y habló de ocupación, de la consolidación del Estado del bienestar, y también de los audiovisuales, si esta Senadora no recuerda mal. Pues bien, estos límites pueden ser amplios, interesantes, y en ellos seguramente tendrá cabida la actuación de esta comisión especial.

Por nuestra parte, además de indicar que participaremos en esta comisión con muchísimo interés y llevando a cabo un seguimiento muy de cerca de los trabajos que en ella se realicen, queremos decir que, quizá en una gran parte, los límites que debe tener esta Comisión sean los de las prioridades del Gobierno. Y así, nos parecen obligados, lo suficientemente amplios, y que pueden responder a lo que el interpelante, el Senador Ferrer, puso en su momento —el 22 de octubre— como frontispicio de su interpellación en lo que a valores se refiere: los valores de la solidaridad y la participación, que entiendo que eran los que preocupaban al Senador Ferrer en esta nueva fase, en cuanto a la rentabilización de todo aquello que había ocupado la primera fase de la actuación gubernamental, de recuperación de las libertades y de subsanación de los déficit democráticos del Estado español.

Hoy el Senador Ferrer se ha referido a dos nuevos ejes de actuación. Como no podía ser de otra manera, ha hablado del desarrollo económico, para encajar y ordenar los trabajos de la Comisión, y de las políticas de Gobierno, pero también de otras cuestiones, como son las que plantea el hecho...

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Perdona, Senadora Martín.

Señorías, estamos tratando sobre la creación de una Comisión para estudiar la evolución económica y social del Estado. Como pueden suponer, es un tema importante, y al menos centra el interés de algunos Senadores. Por tanto, les pido un poco más de atención sobre este tema, que realmente se lo merece. Muchas gracias.

Puede continuar, señoría.

La señora MARTÍN I VIGIL: Muchas gracias, señor Presidente.

Decía que el Senador Ferrer hoy también ha enfatizado la cuestión relativa al crecimiento económico, que no se puede separar de los nuevos planteamientos que requiere esta nueva fase del desarrollo económico y social. Y creemos necesario poner estas cuestiones sobre la mesa, para conocer exactamente el horizonte de la comisión, así como los límites que marcarán nuestro trabajo.

Parecería suficiente con manifestar nuestro apoyo a la creación de esta comisión, pero queremos dejar constan-

cia del interés que tiene para nuestro grupo el hecho de que el debate en el que el Senador Ferrer emplazó, no sólo al Gobierno, sino a todos y cada uno de los grupos de la Cámara, continúe con la participación realmente cualificada de todos los grupos. Por tanto, participaremos de esta Comisión en ese sentido, entendiéndolo que sus trabajos deben tener utilidad para las políticas que tienen que plantearse en la fase que estamos viviendo, que indiscutiblemente es distinta de la de los últimos veinte años, a que ha hecho referencia el Senador interpelante.

Gracias, señor Presidente, y gracias, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Senadora.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Alierta Izuel.

El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Senadores, nuestro Grupo va a apoyar la creación de esta Comisión para estudiar el desarrollo económico y social.

No es este el momento de ahondar en el contenido de la comisión, lo que será tarea de ésta. Por tanto, sólo me voy a referir a un hecho feliz, acontecido hace unos días. Desde que se presentó la interpellación en esta Cámara, se ha resuelto uno de los problemas que un sector muy importante, la sanidad, venía teniendo, debido a la insuficiencia de financiación. Evidentemente, en este camino de realización económica y social se avanza permanentemente. Los grandes objetivos fijados hace muchos años seguirán teniendo vigencia, como el empleo, el crecimiento, la atención de las necesidades sociales. De todas maneras, yo quisiera entender, tanto en el contenido de la interpellación del Senador Ferrer como en la intervención que ha realizado al presentar la solicitud de creación de esta comisión especial que, en su opinión, hay algunos elementos que, pasados unos años, son diferentes y se han desfasado.

Evidentemente, la mayor parte de los criterios, aspiraciones y objetivos van a tener un valor permanente. Señalaba el empleo, el crecimiento, el cumplimiento de satisfacciones sociales, pero hay algunas cuestiones que han ido cambiando, como lo hacen con el curso de los años los países, las naciones, las tierras. Hacía referencia a veces a la existencia de excelentes autovías en este país que, sin embargo, atraviesan zonas desérticas.

Yo quisiera llevar un poco más allá estas reflexiones para tratar de centrar un poco cuál es el contenido especializado de esta comisión que se pretende crear.

Tenemos buenas autovías, buenas comunicaciones, hemos ido superando estos problemas tradicionales que existían en España, que es una tierra de orografía difícil, de comunicaciones difíciles que han sido siempre un obstáculo para nuestro desarrollo. Sin embargo, cuando hablamos desde un punto de vista económico y social de la posibilidad de movilidad de las personas, de desplazarse de una ciudad a otra, de un pueblo a otro para mejorar sus oportunidades de trabajo, nos encontramos con que

España es el ejemplo de un país cuya movilidad es mínima. Los ciudadanos tenemos una serie de ligaduras muy difíciles de resolver, como la vivienda, las relaciones sociales, etcétera, que a veces nos atan de una forma demasiado permanente al lugar en el que estamos.

Hay carreteras, hay posibilidades de transportes, pero todavía hay muchos obstáculos, a veces no deseados, tales como la imposibilidad de encontrar una nueva vivienda allá donde vayamos o una educación para nuestros hijos, que en otros países tienen resuelto. Es decir, hay infraestructuras, pero, sin embargo, la movilidad física de los ciudadanos no se traduce con la plenitud que sería de desear en la movilidad social. Quizá fuera un elemento a considerar cuáles son esos obstáculos para la movilidad social, que impiden su desarrollo, cuando estamos intentando superar los obstáculos a la movilidad física que tenemos.

El Senador Ferrer también señalaba en alguna de sus observaciones cómo yendo a lo largo de la geografía española por autovías, hay kilómetros y kilómetros vacíos, sin nadie a su alrededor. Es algo que también nos pasa a la mayor parte de los Senadores que tenemos que venir todas las semanas a Madrid. Venimos de nuestros lugares de origen, a veces por autovía, otras por autopista y, sin embargo, durante kilómetros y a veces, cientos de ellos, pasamos por lugares donde no hay población, están prácticamente vacíos, por no decir, en algunos casos, totalmente vacíos, como es el caso de este Senador que les habla.

Venimos desde nuestras ciudades de origen y llegamos a Madrid, donde en pocos kilómetros hay una gran densidad de población. Hay varios millones de personas concentradas y cientos de kilómetros vacíos totalmente, con pueblos que se están despoblando.

¿Qué es lo que pasa para que esto ocurra? ¿Es que en las ciudades, como por ejemplo Madrid, hay más oportunidades para desarrollar una carrera profesional que en un pueblo entre Madrid y Zaragoza y eso nos lleva a concentrarnos aquí, dando lugar a que disminuya la población en esos pueblos, cuando, sin embargo, en esas pequeñas ciudades, en esos pueblos, la calidad de vida, a veces y para muchas personas, es superior?

Son cuestiones que también nos tenemos que plantear. El por qué en amplios lugares de la geografía española las oportunidades son inferiores, lo que en muchos casos conlleva asumir los inconvenientes que significa vivir en una conurbación muy aglomerada, como es el caso de Madrid u otras ciudades de la geografía española. Si uno va por las carreteras ve grandes ciudades, vacíos y así sucesivamente. ¿Cómo corregir estos desequilibrios? ¿Cómo llevar a lo largo y ancho de toda la geografía española esas oportunidades en un momento en el que hay movilidad física, fácil accesibilidad en términos físicos, y las comunicaciones comienzan a ser ya un problema que empieza a estar resuelto? Con las telecomunicaciones, con el Internet, con todo lo que se avecina es fácil reunir información hoy en día en Sigüenza como en Madrid. Sin embargo, Sigüenza, esa magnífica y bonita ciudad se va quedando sola y abandonada; nos aglomeramos todos

en Madrid. Y quien dice Sigüenza dice Tarazona, dice Daroca, dice Montblanc, cualquier ciudad a lo ancho de España.

Son cuestiones que tenemos que enfocar. Vamos resolviendo problemas de aislamiento físico y de comunicaciones pero, sin embargo, no le sacamos el partido necesario, para que las personas que residen en diferentes sitios de la geografía española puedan tener las mismas oportunidades.

Tenemos que equilibrarnos más y dar más oportunidades a nuestros ciudadanos. No tenemos que circunscribirnos a las posibilidades que ya existen y quizás en estas dimensiones es donde podríamos encontrar una labor especial para esta Comisión.

Evidentemente, como señalaba y resumo, esos grandes objetivos de desarrollo económico y social están allí. Habrá que matizarlos y modularlos. Habrá que analizarlos en términos de eficacia, y ver qué es lo que se consigue y qué recursos se le destina. Pero quizás el elemento distintivo, si he creído entender al senador Ferrer en su exposición, tanto en la interpelación como hoy, en esa circunstancia, quizá un poco característica de nuestro país, con tantos desequilibrios, aglomeraciones por un sitio, vacíos por otro; tantos aislamientos que se van superando y, sin embargo, no permiten la movilidad de los ciudadanos ni permiten llegar a los últimos rincones de nuestra geografía. Esas posibilidades de desarrollo económico y social son las que todos deseamos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Alierta.

Por las intervenciones habidas, creo que puedo proponer a los distintos grupos que esta petición de creación sea aprobada por asentimiento. (*Pausa*)

Así es y así consta. Por tanto, queda aprobada por esta Cámara la constitución de esta Comisión.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN:

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS NORMATIVAS Y ADMINISTRATIVAS TENDENTES A LA INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA (671/000033).

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La primera moción es la que formula el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la adopción de medidas normativas y administrativas tendentes a la integración de los inmigrantes en la sociedad española.

Tiene la palabra el Senador Oliart.

El señor OLIART PONS: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, la moción que voy a defender tiene o persigue dos objetivos fundamentales: El primero, contribuir a

crear las condiciones favorables para una rápida integración de los trabajadores extranjeros y de sus familiares en nuestra sociedad. El segundo, tan importante como el primero o más, impulsar al Gobierno a luchar con más medios y eficacia contra el paso de inmigrantes por el Estrecho, la creciente actividad de las mafias traficantes de inmigrantes y la situación de los campamentos de Ceuta y Melilla.

Consideramos que la política de integración es el pilar fundamental de una política de inmigración, puesto que para no caer en situaciones similares a las de algunos países vecinos es necesario, señoras y señores Senadores, pasar de las palabras a los hechos.

Esa política de integración la dividiría en dos tipos de medidas: Un primer tipo que sería para conseguir la plena igualdad de derechos sociales de los inmigrantes y de sus familiares. Consideramos ese objetivo de la máxima importancia. Por ejemplo, lo primero, sería Sanidad. Conseguir que la sanidad española atienda a todos los inmigrantes de manera completa, independientemente de su situación legal y, aunque para ello fuera necesario hacer alguna modificación legislativa, es eso lo que estamos pidiendo.

En materia de trabajo, consideramos que se ha de incrementar el control y las sanciones de las contrataciones irregulares, luchar con más eficacia contra la economía sumergida y facilitar a los inmigrantes el acceso a la formación profesional y a la ocupacional con plena igualdad con los trabajadores españoles y, si es necesario, crear cursos específicos cuando no haya otro remedio para que todos los inmigrantes puedan salir perfectamente formados para entrar en el mercado de trabajo.

En educación, nosotros pedimos la plena escolarización de los hijos de inmigrantes en edad escolar, independientemente de la situación legal de sus padres, y pedimos también una distribución racional dentro de una localidad o distrito de aquéllos, sin que esto presuponga la fijación de ningún cupo, ningún máximo ni ningún mínimo, sino con medidas que induzcan a unos y a otros a aceptar este criterio que consideramos muy importante. Nosotros conocemos escuelas públicas —no tanto las concertadas— en las que hay una gran masificación de hijos de inmigrantes y, por ejemplo, podría citar una en la que me consta que el 74 por ciento de su población escolar es de otra procedencia que la española, y que incluso llegan a tener 24 nacionalidades distintas.

También queremos que estos niños de inmigrantes tengan acceso a las becas, a los comedores, a los transportes y a todos los servicios complementarios en igualdad de condiciones con los escolares españoles. Pensamos, señorías, que la segunda generación es clave, porque todos sabemos que los inmigrantes, cuando llegan a nuestro país, piensan en el retorno, aunque luego se queden, pero es seguro que los que nacen aquí en su mayoría se van a quedar y van a ser —y queremos que lo sean— ciudadanos de pleno derecho.

Decía Jefferson que hay que dar al pueblo las llaves de la caja fuerte, y entendía por la caja fuerte, precisamente, la educación, es decir, que es darles a estos hijos

de inmigrantes las llaves de su futuro si se les garantiza una educación, de acuerdo con nuestras leyes, igual que para todos los ciudadanos que conviven aquí.

El tema de la vivienda es otro de los temas fundamentales. Hemos de evitar la concentración de inmigrantes en determinadas áreas de nuestras ciudades, evitar también la explotación a que están sujetos por el tema de los alquileres y, lógicamente, garantizar, dentro de este objetivo de conseguir esa igualdad, que tengan la misma igualdad para acceder a la vivienda protegida, a la vivienda social. Esto, naturalmente, se habría de hacer coordinadamente con las administraciones locales y autonómicas, puesto que muchas de esas competencias están ya transferidas, y se tendría que dar prioridad a todas las actuaciones conducentes a la rehabilitación de los centros históricos degradados, pues es precisamente en estos lugares donde tienden a concentrarse los recién venidos.

Y hay un segundo tipo de medidas que serían las que favorecerían la estabilidad social de los inmigrantes y la comunicación intercultural con nuestra sociedad.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Oliart, ya hace un ratito que se terminó su tiempo.

El señor OLIART PONS: De acuerdo, señor Presidente. Terminaré lo antes posible. ¿Me concede un minuto?

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Ante cinco minutos, un minuto es bastante.

Muchas gracias.

El señor OLIART PONS: Deseamos que se creen todas las oficinas de extranjería que están previstas por el Gobierno, que se facilite la reagrupación familiar, que se sensibilice a la opinión pública y que se creen sobre todo espacios de encuentro y que el instrumento o foro para la integración social de la inmigración también sea un instrumento que, ya que se ha creado, se dote convenientemente para que haga sus funciones.

En cuanto a las situaciones dramáticas, de todas conocidas, hay que combatir las y enderezarlas empleando todos los medios al alcance del Gobierno. Nos referimos al tráfico de inmigrantes, a la situación de Ceuta y Melilla y al cruce del Estrecho. Nuestra moción, precisamente, presenta sobre estos tres puntos acciones muy concretas.

Señoras y señores Senadores, señor Presidente, ya que el tiempo se me ha metido encima, doy por terminada esta intervención, pidiéndoles el voto favorable para esta moción.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Oliart.

A esta moción se ha presentado una enmienda que va a defender la Senadora doña Isabel San Baldomero.

La señora SAN BALDOMERO OCHOA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, Senador Oliart, el Grupo Parlamentario Popular había presentado una enmienda de modificación de su moción porque en esta Cámara, en la Cámara que el Grupo Parlamentario Popular entiende y que creo entenderán todos los grupos de representación territorial, entendíamos que lo que su Grupo presentaba, y usted ha defendido, se conculcan gravemente las competencias de las Comunidades Autónomas, especialmente en los temas de sanidad, de educación y de vivienda.

La Ley Orgánica 7/1985 dice que los inmigrantes se encuentran con garantía de su cobertura sanitaria en igualdad de derecho que los españoles. Dése usted cuenta de la diferencia de los territorios Insalud o no Insalud, por lo que es muy difícil que podamos aceptar que el Gobierno tenga que instar a un Gobierno, como es el de su Comunidad Autónoma, a que haga algo sobre lo que tiene plenas competencias.

Senador, en el tema de educación nos pasa lo mismo, todos los extranjeros, según la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, tendrán derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, con independencia, incluso, de su situación documental.

La distribución racional que usted nos solicita conculca el derecho de los padres a la libre elección de centros, y el Real Decreto 299/1996 habla, además, de que en el territorio MEC existen las comisiones de escolarización, que son las que distribuyen, las que dan las becas y las que conceden todo lo que usted nos solicita.

Por lo tanto, nos volvemos a encontrar con el mismo problema, Senador ¿Qué hacemos? ¿Instamos a las Comunidades Autónomas que tienen plenas competencias o solamente a las Comunidades Autónomas que no las tienen?

Respecto al tema del alojamiento digno, Senador, durante 1997 se han priorizado los programas de realojo, pero la competencia exclusiva en materia de vivienda es de las Comunidades Autónomas, aunque el Gobierno lleva a cabo en este momento programas y planes de financiación para actuaciones protegibles no solamente para inmigrantes, que están incluidos, sino también para población con escasos recursos. Por lo tanto, lo está haciendo el Gobierno.

En el punto 4, que dice «potenciar la inspección en el programa de trabajo», en los diez primeros meses de este año se han realizado más actas y más sanciones porque se ha detectado un 17,9 por ciento más de infracciones y un 18,6 por ciento más de sanciones. Fíjese si funciona la inspección de trabajo.

Pero en el punto 4 b), con respecto a esto en este momento hay dos órganos de trabajo en las Cortes Generales, una Subcomisión de inmigración en el Congreso y una Ponencia de economía sumergida en el Senado. Conozcamos cuáles son sus comparecencias y conclusiones y pongámonos a trabajar donde siempre nos va encontrar, siempre, usted no lo dude nunca.

El punto 4 c), señoría, ¡cómo no se va a aplicar! Eso es algo que está en la cabeza de todos.

En cuanto al Plan de formación profesional que usted pide, conocerá el Real Decreto 631/1993, que dice tex-

tualmente que los inmigrantes son el colectivo preferente en el tema de formación.

Me habla también del ánimo educativo y cultural. En este momento en el Ministerio de Administraciones Públicas —tal vez su señoría no lo conozca— se ha creado una Subcomisión de coordinación entre las diferentes administraciones públicas, especialmente para los temas de inmigración, con responsables de las áreas central, autonómica y local. Me cita los temas de participación y sensibilización ciudadana. Este año, señoría, se han hecho 13 programas con participación ciudadana y ONGs especialmente dedicados a la sensibilización.

En el punto 7, cuando se creó el foro, a través del Real Decreto de 7 de abril de 1995, se creó sin dotación, muchas competencias y ningún dinero. Por primera vez, señoría, este año habrá dinero para el foro.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador San Baldomero, ha terminado su tiempo.

La señora SAN BALDOMERO OCHOA: Señor Presidente, si me permite un minuto más, como al Senador Oliart, se lo agradezco.

Le ruego que examine la partida 19.04.313.453 de los Presupuestos Generales del Estado y se encontrará con que, por primera vez, el foro tiene dinero. El tema más sangrante en este momento y en el que nosotros habíamos puesto especial dedicación en nuestra enmienda era el de Ceuta y Melilla. Le ofrezco, Senador Oliart —como a todos los Grupos Parlamentarios—, información sobre todo y cuanto se ha hecho en este momento y el Gobierno tiene en previsión. Senador Oliart, para todo lo que sea integración de cualquier colectivo, especialmente con el de los inmigrantes, contará con nosotros. Pero, por favor, no conculque, especialmente en esta Cámara, los derechos que tienen en este momento reconocidas las Comunidades Autónomas.

Muchas gracias, señoría; gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

Para contestar a la defensa de la enmienda, tiene la palabra el Senador que ha promovido la misma.

El señor OLIART PONS: Gracias, señor Presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular nos ha presentado una enmienda de nueve puntos que, a nuestro entender, diluye los puntos que modifica, aun cuando —hemos de reconocerlo— respeta el sentido de las actuaciones que nosotros propugnamos.

Es indudable que si nosotros nos tuviéramos que basar únicamente en ese texto seguramente podríamos llegar a una transaccional o a algún tipo de acuerdo. Lo que sucede es que la importancia de la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular no lo es tanto en los puntos que modifica sino en los que omite, que para nosotros son básicos. Omite los puntos de sanidad, los de educación y los de vivienda, y prácticamente todo lo referente al trabajo, cuestiones que, como antes he señala-

do, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista considera básicas para lograr una igualdad efectiva y para la plena integración de los inmigrantes y sus familiares.

Nuestra moción significa un avance, y eso es lo que queremos conseguir hoy si es posible. Por ejemplo, en trabajo, se omiten todas las actuaciones concretas que pedimos en orden a acceder a la formación ocupacional y a un mismo trato cuando se detecta una contratación irregular. Nuestra propuesta, repito, supone un avance importante en ese objetivo principal de conseguir la plenitud de derechos sociales de los inmigrantes. La enmienda del Grupo Parlamentario Popular dejaría, señorías, las cosas más o menos como están ahora.

Nuestra propuesta inicialmente era una propuesta positiva, abierta, y hemos hecho ya un esfuerzo de consenso muy importante al redactarla. Nosotros valoramos de verdad y tenemos en cuenta los esfuerzos de la Senadora doña María Isabel San Baldomero para lograr algún tipo de acuerdo, en lo que no estamos de acuerdo es cuando nos dice que sanidad, educación, vivienda y trabajo son competencias transferidas todas ellas a las Comunidades Autónomas. Si es verdad que una parte están transferidas, pero también lo es que las leyes básicas del Estado son competencias del Estado y, por lo tanto, cuando instamos a que se adopten determinadas actuaciones estamos diciendo que se hagan todas aquellas modificaciones o correcciones legislativas y normativas que competen al Gobierno del Estado y, naturalmente, el Gobierno del Estado si alguna cosa ha de hacer luego será siempre coordinadamente con las Comunidades Autónomas, no en contra de las mismas.

Sobre la financiación de la vivienda, señora doña María Isabel San Baldomero, sabe perfectamente que los planes de vivienda se hacen y se diseñan en el Gobierno del Estado, y la financiación de la política del Gobierno pertenece también al Gobierno del Estado.

Nosotros no conculcamos con los puntos de esa moción ningún derecho de ninguna Comunidad Autónoma. Lo único que queremos, repito, es conseguir ese objetivo: alcanzar la plena igualdad de los inmigrantes y sus familiares respecto a los españoles; que sean unos ciudadanos más. Es la única manera de poder realmente asegurar para el futuro una convivencia armónica y mantener también la cohesión social.

Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Senadores.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Oliart.

En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Román Clemente.

El señor ROMÁN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.

Señorías, vamos a apoyar todos los puntos de esta moción. Consideramos que todos los esfuerzos que se hagan para procurar la integración de inmigrantes en la sociedad son pocos en el momento actual. Esta Cámara, mejor que ningún otro sitio, sabe de los esfuerzos que se pue-

den realizar para, sin entrar en las competencias, sin menospreciar o conculcar las competencias que tienen las Comunidades Autónomas, hacer un esfuerzo en todas las políticas sociales: sanidad, educación, vivienda, que permitan esa plena integración de los inmigrantes.

La propuesta de moción recoge puntos sin duda fundamentales e interesantes; las enmiendas también quieren justificar, sin duda, la posición del Gobierno y rebajan las pretensiones iniciales. Señorías, entre un punto y otro, el Senado, esta Cámara podía hacer un esfuerzo de entendimiento que propiciara las medidas de integración, pero el esfuerzo de entendimiento no pasa por la devaluación que se plantea en las enmiendas, señorías.

Sin duda quien conozca la situación en la enseñanza no puede por menos que recoger que la integración plena en el sistema educativo precisa de una serie de medidas. No basta sólo con tener a los niños y niñas, hijos e hijas de inmigrantes, en los centros; hay que formar al profesorado; hay que dotarlos de medios económicos y materiales para hacer plena esa integración. Otra cosa sería simplemente una formulación. Lo mismo cabría decir con la vivienda. Quien conoce la situación en la que viven los inmigrantes, esa situación de precariedad, sabe que todos los esfuerzos son precisos y necesarios. Por eso yo valoro suficientemente la propuesta de moción.

Creemos que va dirigida a dotar a las Comunidades Autónomas, al propio Gobierno de España de las medidas necesarias para hacer efectiva esa integración, y, por tanto, extenderse más en algo que está suficientemente explicado sería ocioso. No quiero dejar de valorar los esfuerzos que pueda hacer el Gobierno en esta materia, pero por eso precisamente tiene más sentido no oponerse a esta moción. Sería necesario un consenso amplio en esta Cámara para que estas medidas, no sólo se adopten, sino que se lleven a efecto con la urgencia necesaria, sin demora.

Por ello hacemos un esfuerzo, y el esfuerzo es que estas enmiendas no puedan ser un obstáculo para la aprobación de la moción; resolvamos la forma de adoptar, por parte de los Gobiernos de Comunidades Autónomas y el Gobierno de la Nación, aquellas medidas necesarias para ponerla en funcionamiento con urgencia, pero, señorías, no la demoremos más, porque la integración plena, tal y como recoge nuestro ordenamiento constitucional, no sólo es un derecho, sino que ese derecho tiene que ejecutarse plenamente.

Gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el Senador Caballero Lasquíbar.

El señor CABALLERO LASQUÍBAR: Muchas gracias, señor Presidente.

Muy brevemente para decir que coincidimos sustancialmente con lo expuesto por el Senador Oliart y que motiva la moción presentada por el Grupo Socialista.

Con esta iniciativa se pretende avanzar efectivamente en el objetivo de lograr la plena igualdad de aquellos inmigrantes que conviven entre nosotros. Desde nuestro punto de vista, su apoyo no solamente conduce a ello, sino que permitirá dar virtualidad a las diversas recomendaciones que ha venido realizando al respecto la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa, políticas que desde el Gobierno vasco se están realizando.

Por ello, y por coincidir con nuestros principios de justicia y de dignidad humana, nos congratulamos con su iniciativa, señor Oliart y, en consecuencia, votaremos a favor de la misma.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Capdevila.

El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor Presidente.

Nuestro Grupo va a votar favorablemente a la moción consecuencia de interpelación, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Debo insistir en que nuestro Grupo está extremadamente sensibilizado con el tema de la integración de los inmigrantes. No en balde, en Cataluña hay varias ciudades en las que se concentran gran parte de los inmigrantes de aquella Comunidad. Estamos de acuerdo, pues, en que haya una igualdad de derechos y deberes en cuanto a los inmigrantes ubicados que viven España.

Entendemos que la inmigración no es realmente un problema, sino un fenómeno. En todo caso, todo inmigrante lleva un drama. No vamos a insistir en la dramática situación en la que se encuentran los inmigrantes en el transcurso de sus constantes viajes en pateras, en las que constantemente pierden la vida para buscar, en definitiva, un lugar donde poder trabajar. Es un tema que sobrepasa a los partidos, es un tema de Estado que requiere precisamente un gran consenso. Una muestra la tuvimos el 7 de octubre pasado en la moción que se presentó en el Congreso de los Diputados y que logró el máximo consenso de todos los partidos que la defendieron, llegando a una transacción. Nos hallamos, pues, ante una política de Estado que precisa un consenso máximo en dicho tema.

La Ley de Extranjería, aprobada en el año 1985 —momento en el que el fenómeno de la inmigración sólo comenzaba—, no ha sabido dar una respuesta adecuada a muchos de los problemas que plantea hoy. Por ello, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió va a presentar en breve una proposición de ley sobre la integración de los inmigrantes, en la que se regulen el reconocimiento de sus derechos y deberes y garantice a su favor las previsiones recogidas en la Constitución, reforzando los mecanismos de coordinación de la política inmigradora en todas sus vertientes, y recoja, entre otras situaciones, las contempladas en las medidas propuestas en la moción presentada por el Grupo Parla-

mentario Socialista. Por ello, nuestro Grupo va a votar favorablemente dicha moción.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Capdevila. (*El señor Presidente ocupa la Presidencia.*)

El señor PRESIDENTE: Vamos a efectuar la votación.

Se inicia la votación (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a favor, 103; en contra, 125.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

MOCIONES:

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR UN PLAN DE MEJORA DE LAS ENSEÑANZAS DE LAS HUMANIDADES EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA, A PROSEGUIR EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE REAL DECRETO DE REFORMA DE LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA, LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO), A ADOPTAR TODAS LAS INICIATIVAS CONDUCENTES A ALCANZAR UN DESEABLE ACUERDO EN ESTA CUESTIÓN, Y A INTENSIFICAR, EN EL SENO DE LA CONFERENCIA DE EDUCACIÓN, LA CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL DESARROLLO DE LAS RESTANTES FASES DEL PLAN DE MEJORA DE LAS HUMANIDADES (662/000102).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto cuarto del orden del día: Mociones.

En primer lugar, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al Gobierno a impulsar un plan de mejora de las enseñanzas de las Humanidades en Educación Secundaria, a proseguir el proceso de elaboración del proyecto de Real Decreto de reforma de las enseñanzas mínimas de ciencias sociales, geografía e historia, lengua castellana y literatura en la Enseñanza Secundaria Obligatoria, a adoptar todas las iniciativas conducentes a alcanzar un deseable acuerdo en esta cuestión, y a intensificar, en el seno de la Conferencia de Educación, la consulta y participación de las Comunidades Autónomas en el desarrollo de las restantes fases del Plan de mejora de las Humanidades.

A esta moción se han presentado dos enmiendas, una, por el Grupo Parlamentario Mixto y, otra, por el Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción originaria, tiene la palabra el portavoz del Grupo firmante, el Senador Fernández Rozada, por tiempo de veinte minutos.

El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señora Ministra, señoras y señores Senadores, la necesidad de la mejora de las enseñanzas de las Humanidades en la Educación Secundaria constituyen un objetivo ampliamente compartido...

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor FERNÁNDEZ ROZADA: ... por la comunidad educativa, la comunidad científica y el conjunto de la sociedad española.

Las Humanidades deben constituir una de las columnas vertebrales de nuestro sistema educativo, pues resultan indispensables para proporcionar a los alumnos los elementos básicos de la cultura y para contribuir al proceso de adquisición de su madurez intelectual que les permitirá ejercer sus responsabilidades de ciudadanos libres en una sociedad democrática...

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor FERNÁNDEZ ROZADA: ... Y pluralista heredera de un rico acervo cultural.

Es percepción común de la comunidad educativa y académica que, por diversas y complejas circunstancias, la enseñanza de las Humanidades presenta en nuestro sistema educativo, y en particular en la Educación Secundaria, carencias e insuficiencias que dificultan gravemente la consecución de los deseables objetivos antes enunciados. Prestigiosas instituciones de intelectuales, profesores y hombres de la cultura han dado la voz de alarma sobre esta situación y han reclamado con insistencia a los poderes públicos un impulso para hacer que las Humanidades tengan el papel fundamental que les corresponde en el proceso integral de formación de los alumnos.

Cuando hoy nos referimos, señorías, a las Humanidades, nos estamos refiriendo a esos conocimientos y estudios que enriquecen el espíritu, aunque no tengan alguna aplicación práctica inmediata. En una época como la nuestra, en la que frecuentemente se busca esa aplicación práctica de los saberes, corremos el riesgo de dejar arrinconados los estudios de las Humanidades, estudios que, sin entrar en más disquisiciones terminológicas, engloban los de filosofía, lengua, literatura, historia —incluida historia del arte— y los estudios clásicos. Son estas, sin duda, materias que no conducen a ninguna aplicación técnica, pero que tienen como objeto de su estudio al propio individuo, su relación con la sociedad en que vive y el tiempo histórico en que se halla inmerso. El hombre es el centro del estudio de estas disciplinas, el hombre que reflexiona sobre sí mismo y el mundo que le rodea, el hombre como animal que se hace social a través de la lengua y el hombre como animal histórico.

Señorías, debe garantizarse a los estudiantes la oportunidad de profundizar con la suficiente amplitud en unos saberes que constituyen indiscutiblemente una fuente valiosísima de construcción de su personalidad, unos saberes que les proporcionan una reserva de pensamiento sobre el ser humano, su condición, sus luchas y su destino, expresados con frecuencia por genios excepcionales del lenguaje o de las artes, cuya validez ha superado las circunstancias de espacio y tiempo en que se produjeron.

Las Humanidades vienen soportando un proceso de creciente abandono, y no sólo en el ámbito español, sino en todo nuestro entorno. Este retroceso de los estudios humanísticos está acompañado de alarmantes síntomas en muchos aspectos de la preparación básica de nuestros escolares. En un asunto tan primordial como el dominio de la lectura y de la escritura, se han hecho públicas encuestas y análisis que muestran unas carencias muy preocupantes.

Señorías, el Gobierno ha sido sensible a esta preocupación, hondamente sentida en lo mejor de nuestro mundo cultural y científico, apoyada por la sociedad española. El Presidente del Gobierno incluyó en su programa de investidura, que gozó del respaldo del Congreso de los Diputados, el compromiso de su Gobierno de ampliar los contenidos humanísticos en nuestro sistema educativo. En cumplimiento de este compromiso, señoras y señores Senadores, el Ministerio de Educación y Cultura anunció una de sus prioridades, desde el comienzo de su gestión, que consistiría en promover la mejora de la enseñanza de las Humanidades. La Ministra de Educación y Cultura abordó esta cuestión en numerosos pronunciamientos desde el inicio del pasado curso escolar. La comunidad educativa y la sociedad española en general conocieron, por tanto, con intensidad, el propósito del Departamento de poner en marcha un amplio plan de reforma de la enseñanza de las Humanidades enmarcado en el objetivo general de mejora de la calidad de la enseñanza. Para llevar adelante el mencionado objetivo, el Ministerio procedió a constituir cuatro comisiones de expertos en geografía e historia, lengua y literatura, filosofía y cultura clásica, formadas por prestigiosos profesores universitarios y de Educación Secundaria especialistas en cada materia y en su docencia, para que elaboraran sendas propuestas de reforma de la enseñanza en cada una de las áreas de conocimiento referidas.

Las comisiones, cuya composición fue dada a conocer a la opinión pública, concluyeron sus trabajos y emitieron un dictamen antes del verano pasado. Los dictámenes han sido difundidos ampliamente en la comunidad académica que ha participado en este proceso de manera activa con numerosos escritos públicos y otros que se han remitido al Ministerio de Educación y Cultura.

En el marco del plan de mejora de las Humanidades, el Ministerio de Educación y Cultura ha elaborado, tras consultar con las Comunidades Autónomas que tienen plenas competencias educativas, el proyecto de Real Decreto de reforma de las enseñanzas mínimas de ciencias sociales: geografía e historia y lengua castellana y literatura en la Educación Secundaria Obligatoria.

Señoras y señores Senadores, el Grupo Parlamentario Popular del Senado considera que la reforma de las enseñanzas mínimas en las materias citadas constituye una ineludible necesidad para alcanzar los objetivos generales de mejora de la enseñanza de las Humanidades. La razón de ello es muy simple. La vigente regulación es claramente insuficiente, es enormemente pobre en cuanto a contenido, tiene clamorosas lagunas y no permite la consecución de la finalidad que el artículo 4.2 de la Logse atribuye a las enseñanzas mínimas: garantizar una formación común de todos los alumnos.

Nuestro Grupo Parlamentario estima que sin una adecuada regulación de las enseñanzas mínimas, básicas del currículum, no resulta viable promover una formación común, de calidad, en las áreas humanísticas. Estas enseñanzas mínimas, señorías, son la garantía de una formación básica común que ha de responder a criterios de calidad. En la fijación de los aspectos básicos del currículum se puede y se debe descender hasta los niveles de concreción que resulten objetivamente imprescindibles para asegurar la esencial finalidad que la ley establece.

La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo atribuye, como sus señorías saben, al Gobierno en exclusividad la fijación de las enseñanzas mínimas. El Grupo Parlamentario Popular en el Senado se congratula de esta actitud del Gobierno y del Ministerio de Educación y Cultura orientada a que las administraciones educativas de las Comunidades Autónomas puedan realizar cuantas aportaciones consideren oportunas para perfeccionar, en su caso, el texto del proyecto de disposición.

Señorías, nuestro Grupo ha seguido con gran atención el debate que en la opinión pública ha suscitado la presentación del proyecto y considera que en este debate se ha puesto de manifiesto un sustancial apoyo de amplísimos sectores del mundo cultural, científico y académico a sus líneas maestras y objetivos.

Creemos —y expresamos nuestra satisfacción por ello— que se ha manifestado una coincidencia en la necesidad de que todos los escolares conozcan suficientemente, con objetividad y rigor científico, el pasado común de España, los elementos comunes y diversos que, dentro de su rica pluralidad, constituyen su historia, así como los jalones fundamentales de la historia universal. Todo ello sin menoscabo alguno del conocimiento y estudio de lo que es propio en cada Comunidad Autónoma.

Señoras y señores Senadores, el Grupo Parlamentario Popular considera que, con espíritu constructivo, es posible y deseable, a partir de este positivo debate que se está desarrollando en la sociedad española, culminar satisfactoriamente, en el marco de un clima de diálogo con las Comunidades Autónomas, el proceso de regulación de las enseñanzas mínimas en las materias citadas, así como proseguir el desarrollo del plan de mejora de estudios de las Humanidades en el conjunto de la Educación Secundaria.

Teniendo en cuenta todo ello, nuestro Grupo ha presentado esta moción en el Senado, por la que se insta al

Gobierno a que realice una serie de actuaciones a las que me referiré a continuación.

Primero, se insta al Gobierno a impulsar un plan de mejora de las enseñanzas de las Humanidades en la Educación Secundaria que proporcione a los alumnos, a lo largo de este nivel educativo, los elementos básicos de la cultura y contribuya a su madurez intelectual y humana.

Segundo, en el marco de dicho plan, se insta al Gobierno a proseguir el proceso de elaboración del proyecto de real decreto de reforma de las enseñanzas mínimas de ciencias sociales, geografía e historia y lengua castellana y literatura en la Enseñanza Secundaria Obligatoria, proceso que está sometido a consulta de las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas con competencias plenas en materia educativa, de manera que se garantice a todos los alumnos el debido conocimiento del patrimonio cultural común, dentro del respeto a la pluralidad que lo constituye y enriquece.

Tercero, a adoptar todas las iniciativas conducentes a alcanzar un deseable acuerdo en esta cuestión con el mayor espíritu de diálogo y con el escrupuloso respeto a las competencias que la Logse atribuye, por una parte, al Gobierno, y, por otra, a las Comunidades Autónomas y, en particular, promover la incorporación de expertos en cada materia, propuestos por las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas, a las Comisiones científicas que han elaborado los dictámenes base del proyecto de regulación. Proseguir la consulta abierta a la comunidad educativa y, en particular, al profesorado implicado. Proseguir la consulta a la comunidad científica a través de las instituciones que la representen.

Cuarto y último, a intensificar, en el seno de la Conferencia de Educación, la consulta y participación de las Comunidades Autónomas a través de las Comisiones o equipos que proceda en el desarrollo de las restantes fases del Plan de mejora de las Humanidades.

Señor Presidente, señora Ministra, señoras y señores Senadores, creo que en el fondo de las palabras que acabo de pronunciar se ve claramente la voluntad política de nuestro Grupo Parlamentario de seguir alentando al Gobierno a que prosiga, a través del diálogo, en la búsqueda del acuerdo necesario que permita el cumplimiento de los objetivos, ya que en el fondo, de acuerdo con las opiniones que se han vertido en las Cámaras parlamentarias y ante la opinión pública por nuestros grupos políticos, insisto, todos estamos de acuerdo en mejorar las enseñanzas mínimas para que los alumnos tengan una calidad de enseñanza y unos conocimientos de los contenidos que les permitan lograr los objetivos de los que aquí se ha hablado.

No obstante, nuestro Grupo Parlamentario está abierto a negociar con los demás grupos, en el ámbito de esta propuesta de diálogo, en la búsqueda del acuerdo, para que la Cámara en su conjunto pueda instar al Gobierno a la consecución de estos objetivos. Sin duda alguna, su sensibilidad, y sobre todo el trabajo demostrado en el último año para conseguir estos objetivos, le hará también comprender y realizar el mandato que desde la Cámara se le pueda trasladar; sensibilidad que no podemos poner en

duda y, sobre todo, ese espíritu de diálogo en la búsqueda del acuerdo que en el último año ha demostrado nuestra Ministra de Educación en la reforma de las Humanidades.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Fernández Rozada.

A esta moción se ha presentado una enmienda transaccional que tienen los portavoces en su poder, y que está firmada tanto por el Grupo proponente como por los grupos mayoritarios de la Cámara.

Como había dos enmiendas, una del Grupo Mixto y otra del Grupo Socialista, que son firmantes de la enmienda transaccional, pregunto a dichos grupos si quieren defender sus enmiendas, o prefieren intervenir directamente en turno de portavoces. *(Pausa.)*

Por tanto, el Grupo Socialista intervendrá posteriormente, mientras que el Grupo Mixto, debido al reparto de intervenciones, puede intervenir ahora, y también con posterioridad.

Tiene la palabra el Senador Ríos.

El señor RÍOS PÉREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, el que se haya presentado una enmienda transaccional no creo que impida que explique el planteamiento de Coalición Canaria con respecto a esta moción; y ya adelanto mi satisfacción porque se haya podido llegar a dicha enmienda transaccional.

Creo que muy pocas personas pueden dudar de la posibilidad legal actual del Ministerio de Educación para establecer ciertos mínimos en lo que se refiere a la docencia de Humanidades en el plan de estudios de la Educación Secundaria Obligatoria.

Los problemas han surgido por la forma, pero también por el fondo. Al igual que opinan otros partidos en varias Comunidades Autónomas, Coalición Canaria piensa que, como ha ocurrido otras veces —tanto con el actual Gobierno, como con los anteriores—, estas cuestiones deben ser ampliamente debatidas para llegar al consenso, tan deseado y fundamental, en materia de formación educativa. En ese sentido deben ir todos los esfuerzos que debemos realizar; es decir, ser completamente positivos para llegar a ese fin con la mínima polémica posible.

Podría extenderme sobre la forma con que se ha llevado la cuestión, pero voy a eludir ese tema para evitar futuras repeticiones.

En cuanto al fondo —sobre todo, en materias de Historia—, se ha comentado que el grupo de expertos que al parecer inició el estudio lo hizo de forma excesivamente exhaustiva, densa, y con un gran número de temas que imposibilitan la complementación programática a la que tienen derecho normativo las Comunidades Autónomas a las que se ha transferido la educación, tanto aquéllas con un mayor margen al poseer idioma propio, como las que no lo tienen. Por tanto, se hace inviable su aceptación y puesta en marcha, independientemente de la interpretación histórica de algunos miembros de la comunidad

científica sobre capítulos más o menos próximos en el tiempo de la Historia de España, como, podríamos decir eufemísticamente, de los peculiares enfoques de algunos historiadores. Por consiguiente, tanto por la cantidad, como por la llamada calidad de los temas, Coalición Canaria se opone a la moción, tal como se ha presentado. Pero, como ya se ha dicho, se ha llegado a una enmienda transaccional.

Por ello, hemos presentado una enmienda, con la única finalidad de abrir un diálogo franco que pueda dar satisfacción al Gobierno del Estado, así como a los de las Comunidades Autónomas.

En ella solicitamos que se suprima el apartado 2 de la moción, porque ya no es posible continuar un proceso de proyecto en el que no hayamos estado todos desde el inicio.

Por otro lado, mantenemos el punto 1, pues es fácilmente objetivable que la situación actual puede ser mejorada entre todos, pero con la presencia de las Comunidades Autónomas desde el comienzo de la elaboración del proyecto.

El tercer punto sería sustituido por otro texto, el que se acompaña, porque no se debe proseguir nada, sino iniciar situaciones.

Por último, estamos plenamente de acuerdo en que todo se desenvuelva en la Conferencia de Educación, pero no en el desarrollo de las restantes fases del plan, ya que en nuestra opinión éste no ha empezado; por tanto, se propone que se supriman las restantes fases citadas.

Con todo ello, y contando además con la representación de centros y profesores, pretendemos llegar al ansiado consenso en materia educativa, olvidándonos de pasados errores, en aras del bien común de la enseñanza de las Humanidades.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ríos. *(El señor Iglesias Marcelo pide la palabra.)*

Tenía entendido que el Grupo Socialista había solicitado intervenir en turno de portavoces. Por eso no le he dado la palabra.

Tiene la palabra el Senador Iglesias Marcelo.

El señor IGLESIAS MARCELO: Señor Presidente, señora Ministra, señorías, me hubiera gustado escuchar en las palabras del portavoz del Grupo Parlamentario Popular algún acercamiento un tanto más crítico, simplemente más real, a lo que ha pasado en estas últimas semanas que, además, está detrás de lo que está pasando esta tarde en esta Cámara: el debate de una moción, que es un réplica a una proposición no de ley, viva en este momento en el Congreso de los Diputados, resultado de un amplio debate, a veces duro, áspero, sobre el tema de la reforma de la enseñanza de las Humanidades en la Educación Secundaria. Encuentro que sus palabras han sido excesivamente laudatorias. Entiendo muy bien su papel, lo que tiene que hacer.

Si vamos a examinar el tema y vamos a llegar a una propuesta de consenso, que implica alguna modificación

—no se le oculta a su señoría— importante en el texto de la moción que presenta el Partido Popular, acerca de cuyo contenido hemos discutido largamente, estando nuestro Grupo dispuesto a comprometer su voto en la aprobación de esa recomendación y de esa instancia al Gobierno, sería bueno que pisáramos el terreno de la realidad.

Señorías, cuando uno se acerca a tratar este tema, baste con que vean el debate de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los Diputados, para ver lo que ocurre. En dicha Cámara se oyen voces como: Esa historia no es la mía, y me temo que no es la nuestra. Si esto fuera un texto legislativo, habría una enmienda a la totalidad por parte del Grupo Parlamentario de Nacionalistas Vascos. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el Bloque Nacionalista Gallego, el Grupo Parlamentario Socialista, han vertido una dura crítica sobre ese proyecto de regulación de la enseñanza de las Humanidades.

Yo debo confesarles que me acerco al tema como quien entra en un campo minado, con el temor de que en cualquier momento una explosión inesperada nos deje a algunos sin cabeza.

Pero yo creo que tenemos que ser honestos, que tenemos que ir al fondo de los temas y tenemos que aportar lo que en el primer debate parlamentario sobre temas de educación yo dije en esta misma Cámara: No estoy dispuesto, ni mi Grupo, a hacer como oposición lo que no estemos dispuestos a hacer como Gobierno.

Por tanto, no se trata de levantar las espadas y de rendir una batalla a ver de qué lado corre la sangre, sino de encontrar un camino que nos permita avanzar en un problema que es importante y cuya solución requiere la suma de un amplio consenso, de un amplio apoyo social, de un amplio apoyo parlamentario, sin el cual corremos el grave riesgo de convertir el campo de la educación en un campo de batalla de destinos inciertos. En ese empeño y en esa tarea que, por otra parte, responde a algo que hemos dicho muchas veces al debatir la Logse voy a centrar la propuesta de enmienda de mi Grupo a la moción del Grupo Parlamentario Popular.

Lo diré con claridad. El comienzo, la tramitación inicial del proyecto de real decreto de regulación de las Humanidades ha sido malo, equivocado, y ha suscitado batallas innecesarias. Naturalmente nadie puede ser tan ingenuo como para pensar que lo que estamos discutiendo es el programa de historia en la Enseñanza Secundaria, aunque aparentemente sí. Estamos discutiendo temas de mucho más fondo, de muchísimo más calado político que el de un programa de una asignatura. No estamos discutiendo las ecuaciones de segundo grado para los alumnos de Secundaria. Eso no merecería ni dos minutos de debate parlamentario. Pero la enseñanza de la Historia sí requiere un debate parlamentario importante. Ha sido un mal comienzo, ha suscitado una polémica terrible. He tenido la sospecha y el temor, y tengo que decirlo con ingenuidad y sin ninguna doble intención, de que la posición del Gobierno haya sido la de buscar deliberadamente una confrontación para no llegar a ninguna solución, para poder levantar alguna bandera que le interesara le-

vantar y defender, lo cual sería una operación ruinosa, aunque pudiera tener efectos inmediatos favorables.

Por tanto, ingenuamente lo digo e ingenuamente lo repito: Mal comienzo ¿Por qué? Se dice que es necesario reformar la enseñanza de las Humanidades. Hay opiniones significadas que afirman que la enseñanza está en una situación precaria. Concedo todo el valor que merecen esas opiniones, esos estudios de los expertos. Hay otros que no opinan de la misma manera, pero ¿no sería justo que hiciéramos una evaluación rigurosa de cuáles son los resultados de la aplicación de un sistema educativo y de una reforma de la enseñanza que ni siquiera ha llegado a su último nivel, que no se ha culminado y, por tanto, sus resultados no pueden ser en este momento constatados con rigor de ninguna manera? ¿No sería razonable tener una valoración rigurosa de la situación? Y no seré yo el que diga que un plan de mejora de la enseñanza de las Humanidades es algo superfluo. Siempre se puede mejorar el plan de enseñanza de esto o de lo otro. Siempre es posible perfilar mejor los contenidos, las actividades, la programación. Pero no lo hemos hecho. Se consulta tarde a las Comunidades Autónomas. Éstas declaran haber entrado en el juego cuando una parte del mismo se había jugado ya, cuando el primer tiempo del partido había sido ya pitado por el árbitro, y cuando había ya un resultado sobre la mesa que parece que se declaraba intocable. Seguramente vamos a tener que tocarlo.

Es un proyecto que elabora objetivos de muy difícil cumplimiento, no digo de imposible, pero sí de muy difícil cumplimiento. Saben sus señorías que en el programa de Historia que contiene ese proyecto de real decreto hay un conjunto de 96 ítems de Historia, que responden al 55 por ciento de un programa en el que las Comunidades Autónomas con lengua propia deben entrar aportando un 45 por ciento. Si se suma eso, más lo que aportan las Comunidades, más la capacidad de programación autónoma que tienen los centros y los profesores —hay aspectos del currículum educativo que están cedidos expresamente a la competencia de los centros y profesores—, el resultado es una propuesta de contenido de diseño de una asignatura que resultará prácticamente imposible de realizar. Por tanto, habrá que retocar eso.

Hay reservas por parte de la distribución competencial, porque si las enseñanzas mínimas son tan grandes, tal vez el campo de juego para las Comunidades Autónomas sea mucho más pequeño y tal vez el campo de la programación autónoma de los centros y de los profesores no sea nada, sea inexistente, cuando la Logse dice claramente cuál es el juego de las competencias.

Por ello, primero, creemos que el procedimiento ha sido malo, y no voy a juzgar el contenido del Real Decreto, que lo he leído detenidamente, y acerca del cual podría emitir muchas opiniones, unas favorables y las otras adversas. Pero no voy a entrar en ello porque creo que el objetivo de esta moción es distinto, y es lo que pedimos en nuestra enmienda alternativa a la propuesta del Partido Popular, en el sentido de proponer que el Gobierno realice una evaluación rigurosa de la situación.

Naturalmente las opiniones de los expertos nos parecen excelentes.

Segundo, que se recabe un amplio debate social y de todas las instancias interesadas en el tema: científicas, educativas y de las Comunidades Autónomas, cuyas competencias tienen que ser escrupulosamente respetadas, lo mismo que las competencias del Gobierno para dictar, mediante un decreto, el contenido de las enseñanzas mínimas; competencias que no dedicaré ni un solo segundo a discutir, porque las reconozco como un elemento fundamental de la acción del Gobierno sin la cual sería imposible gobernar el país. Como eso es así, porque hay que hacer un esfuerzo, porque hay que completar ese proceso, porque hay que plantearlo adecuadamente, señora Ministra, habrá que poner entre paréntesis el proyecto de real decreto, habrá que mantenerlo en el congelador durante cierto tiempo, habrá que llamar a todos los actores para que nos digan lo que piensan, y habrá que intentar consensuar, aunque es un proceso difícil, y lo sé, porque, aunque no lo viví directamente, tuve conocimiento de la enorme dificultad de llegar a un acuerdo con todos los actores cuando la Logse fue discutida y los primeros contenidos mínimos fueron promulgados. Por eso, nosotros pensamos que hay que poner entre paréntesis el proyecto de real decreto, completar el proceso, de manera que todo el mundo entienda que se han garantizado los certificados de competencia y de capacidad para intervenir en el proceso, para que podamos llegar a una solución correcta y satisfactoria cuyo sentido me reservo para mi próxima intervención.

Muchas gracias. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Iglesias Marcelo.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el Senador Román Clemente, por un tiempo de cinco minutos.

El señor ROMÁN CLEMENTE: Efectivamente, señor Presidente. Compartiré el turno con la Senadora doña Inmaculada de Boneta.

En este momento, y por decirlo muy rápido, señorías, nos encontramos con una moción que tiene enmiendas y una propuesta de transacción. Lo vamos a decir muy claro: ¿Significa que se retira el decreto? Nosotros vamos a votar favorablemente esta propuesta de transacción si significa —y espero que los diferentes portavoces así lo aclaren— que se retira el proyecto de real decreto, que se abre un proceso de reflexión, de debate, y que en ese período de reflexión y de debate participan la comunidad educativa, las organizaciones educativas y los diferentes especialistas —y yo tengo que reconocer y valorar el trabajo que éstos han realizado—. No vale aquí hacer afirmaciones. Han hecho un trabajo y hay que valorarlo.

Pero, señorías, no caben aquí titubeos. En esta propuesta de transacción se tiene que decir que hay que empezar el trabajo, y yo comparto en buena medida el documento que firmaban los Consejeros de Educación del País Vasco, Cataluña, Andalucía y Canarias, porque en

buena parte ese documento viene a decir que hay que establecer un procedimiento de diálogo, de consenso, donde puedan oírse las voces que en un proceso como el educativo tienen no sólo mucho que decir, sino mucha calma que introducir. Por eso, señorías, es importante que aquí no quepan dudas, que no haya titubeos. Esa transacción tiene que significar la retirada del proyecto de real decreto. Esa transacción tiene que significar la apertura de un proceso amplio, sosegado, intenso de debate, porque en un proceso como el educativo las improvisaciones se pagan y se pagan muy caras. El proceso no puede significar, señorías —y así lo entendemos—, salir de aquí con la duda, y por eso nosotros pediremos que todos los portavoces aclaren, en sus diferentes turnos, si esa transacción a la que han llegado significa empezar por donde debía haberse hecho, por respetar esas reglas básicas del juego que son el diálogo, el consenso, el entendimiento y la participación. Cualquier otra medida, señorías, no va a contar con nuestro apoyo, y no va a contar con nuestro apoyo, insisto, por la enorme trascendencia que tiene todo el proceso educativo y las reformas que en él se vayan efectuando.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
La Senadora De Boneta tiene la palabra.

La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, yo empezaría por donde ha terminado mi compañero representante de Izquierda Unida: si esta enmienda o esta redacción final de una serie de enmiendas transaccionales significa que el Decreto o el proyecto de decreto queda retirado o siquiera congelado, podríamos comenzar a hablar de consenso.

Pero, desgraciadamente, la redacción de la enmienda transaccional no dice nada de eso; es más, cuando habla del desarrollo del Decreto de Humanidades, igual y en el mismo contexto que en la moción original, en un amplio consenso, está dando por supuesto que lo hecho está y es bueno, y lo hecho, señorías, no ha contado ni con la participación de las Comunidades Autónomas, ni con la participación de la comunidad educativa. Digo que no ha contado con la participación de las Comunidades Autónomas porque éstas no se han enterado más que por la prensa de este proyecto de Decreto; han sido obviadas. La Comisión de expertos, contra la que no tengo nada que objetar, puesto que realmente habrá hecho su trabajo, se ha constituido desde la óptica y desde la unilateralidad del Ministerio de Educación, del Gobierno, con lo cual no se ha tenido en cuenta para nada la posibilidad de llegar a consensos y de participar en el proceso.

Al final, tanto en el texto que se elabore como en la moción que hoy se debate, lo que se están intentando hacer son modificaciones sin rectificar. Señorías, creo que cuando hay un error lo mejor es rectificar, de la misma manera que cuando uno intenta aparcar un coche y la primera maniobra le sale mal, lo mejor que puede hacer es salir y volver a entrar, y no hacer un montón de manio-

bras que al final dejan la cuestión peor que antes, a no ser que todo esto sea una maniobra de distracción, y en esto ha sido muy claro mi compañero el Senador Román.

Queremos saber si realmente esto significa que el tema va a seguir adelante en el mismo sentido y si realmente se está encubriendo la intención de modificar el artículo 4.2 de la Logse, porque si hablamos de la reforma de las Humanidades y aprovechamos —nunca mejor dicho— que el Pisuerga pasa por Valladolid, lo que estamos haciendo es intentar reformar las enseñanzas mínimas a través del artículo 4.2 de la Logse.

Si esto es así, y esto es así porque el Senador representante del Grupo Parlamentario Popular ha sido meridianamente claro sobre la falta de concreción y la pobreza —me parece que han sido sus palabras textuales— del artículo 4.2 de la Logse, y luego en el texto final aparece no ya la reforma que todos pensamos que se debe hacer de las Humanidades para impulsar su enseñanza, sino la reforma de las enseñanzas mínimas, vemos la finalidad que tiene este planteamiento.

Hablo en este sentido no solamente en nombre de Eusko Alkartasuna, sino también del Consejero de Educación del Gobierno Vasco y del propio Gobierno que ha asumido las posiciones y el informe del Departamento de Educación.

Señorías, me parece que el consenso educativo es necesario, que no se puede avanzar en materia educativa en contra de la sociedad y que, además, no se puede modificar subrepticamente una Ley aprovechando que realmente hay una inquietud —probablemente inquietud fundada y sentida— sobre las Humanidades y la necesidad de la reforma de sus enseñanzas.

Por lo tanto, esta Senadora va a decir que no a la enmienda transaccional, como hubiera dicho que no a la moción inicial.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora De Boneta.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Albístur.

El señor ALBÍSTUR MARÍN: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, llevamos mucho tiempo quejándonos del problema que hoy nos afecta, y siempre que se quiere dar un paso hacia adelante el problema encuentra mil limitaciones. Hoy no vamos a ser capaces de desatar el nudo, sino todo lo contrario.

No vamos a conseguir el consenso que hubiera sido necesario y mantenemos todavía a la sociedad política —yo diría que a gran parte de la sociedad civil y estatal— dividida. Y tiene usted responsabilidad en ello, señora Ministra, se lo digo con cordialidad y con aprecio, pero creo que podríamos haber llegado a un acuerdo.

Nuestro Grupo se ha mostrado dispuesto a adoptar, siempre con lo que cree que es el mayor espíritu de diálogo, todas las iniciativas que pueden conducir a alcanzar un consenso en el diseño de un tratamiento integral de las

Humanidades, con la finalidad de garantizar el respeto a las competencias propias de las Comunidades Autónomas, a los fundamentos conceptuales, educativos y didácticos que inspiran la Logse, sobre todo teniendo en cuenta las características del alumnado que va a recibir los objetivos y las enseñanzas, contenidos y procedimientos. Todo ello considerando algo que para nosotros es clave: la concepción plurinacional y pluricultural que reconocen los artículos 1 y 2 de la Constitución.

Nuestro Grupo quiere proseguir en una amplia consulta abierta a la comunidad educativa, y en particular al profesorado implicado, así como a la comunidad científica, a través de las instituciones —instituciones políticas, universitarias, docentes, en general— en las cuales están representados.

Para nuestro Grupo, revitalizar la presencia de las Humanidades constituye un objetivo loable que, en cualquier caso, debe basarse en un análisis serio y profundo de los planes vigentes. En ningún caso puede plantearse tal objetivo sólo a partir de un documento de 17 páginas, el llamado Plan de mejora de la enseñanza de las Humanidades en el sistema educativo español, basado en lo que consideramos que es una dudosa mezcla de opiniones y valoraciones diversas y en el que no se plantea evaluación alguna de los planes vigentes.

Abundando en lo anterior, diría que cualquier actuación de la Administración del Estado que pretenda el establecimiento de unos contenidos de los programas de enseñanza que superen la concepción de mínimos, que incluso ha sido ya tasada por la libre voluntad del legislador, es claramente vulneradora del ordenamiento vigente y supone una invasión de competencias que tiene como aspiración más inmediata la supresión de cualquier peculiaridad específica y la tendencia hacia una uniformidad muy lejana de la voluntad del constituyente, de las interpretaciones del Tribunal Constitucional, de la propia Constitución y del Estatuto de Autonomía del País Vasco, al que represento desde esta tribuna.

Cualquier propuesta que quiera plantearse en relación a la reforma de las Humanidades, para nuestro Grupo deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: la consideración del diálogo, reitero, y la búsqueda de consenso como elementos irrenunciables de las actuaciones en el mundo educativo. El diagnóstico de la situación debe basarse en procedimientos acordados de evaluación, pero en ningún caso sustentarse en testimonios de autoridad de la comunidad educativa o académica. Deberá también partirse de una concepción plurinacional y pluricultural de la realidad política y social que es el Estado español, y ha de garantizarse el respeto a las competencias propias de las Comunidades Autónomas. Insisto también en que debe asegurarse la coherencia en relación a los fundamentos conceptuales, educativos y didácticos que inspiran a la Logse.

Finalmente, consideramos que resulta fundamental respetar las características del alumnado, que es el receptor de los objetivos, de los contenidos y de los procedimientos.

Creíamos que podíamos haber llegado hoy a un consenso. Queda tiempo para debate, queda tiempo para llegar verdaderamente a una solución que resulte satisfactoria para todas las partes y para toda la singularidad que tiene la sociedad del Estado español. Esperemos que haya otra oportunidad porque hoy, lamentablemente, no se va a conseguir.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Albístur.

Por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Varela.

El señor VARELA I SERRA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, cuando en el fondo de una cuestión —la mejora de la enseñanza de las Humanidades en este caso— se está fundamentalmente de acuerdo y, sin embargo, hay tanta polémica en su tramitación, es porque la forma utilizada, el método diseñado para alcanzar tal objetivo ha sido muy poco afortunado.

Decía Tucídides que un dirigente político ha de tener, no solamente las manos limpias, sino también los ojos. Tener los ojos limpios para ver con nitidez, con claridad qué clase de país es el que se gobierna, cuáles son los sentimientos, las sensibilidades de sus habitantes, la estructura organizativa, social y política que regula su convivencia, etcétera. Ojos limpios para mirar con mirada clara y serena.

El sistema educativo español es rico, es complejo y tiene espacios de competencia plena en materia de educación, espacios legislados, pactados en su conjunto, y francamente me parece un error considerable pretender modificar unilateralmente este equilibrio. Se puede hacer, se ha hecho ya, pero por eso estamos perdiendo tanto tiempo intentando recomponer el desacierto inicial. Y no diré más porque no tiene excesivo interés entretenerse en los agravios de procedimiento.

Nosotros, señor Ríos y señor Iglesias, evidentemente reconocemos al Ministerio de Educación y Cultura la capacidad legal de fijar las enseñanzas mínimas; es evidente que la tiene. Ayer la señora Ministra en Cataluña Radio decía que parecía que nosotros lo dudábamos. No lo dudamos; tiene esa capacidad; pero para reformar tales enseñanzas mínimas, primero, tendríamos que analizar, estudiar a fondo si tales mínimos han de ser cambiados. La capacidad la tiene, pero, primero, hemos de ver si tales mínimos han de ser cambiados, en todo o en parte. Tal análisis no se ha hecho, y es el punto 2 que se incorpora en la enmienda introducida por el Grupo Parlamentario Socialista. Repito que ese análisis no se ha hecho, al menos nosotros no lo conocemos, y en ese análisis y en esas conclusiones, ¿no tienen nada que decir las Comunidades Autónomas con competencia plena en educación?

En segundo lugar, y en el caso de que se llegase a otra conclusión —la de que hay que introducir cambios en las enseñanzas mínimas—, esa conclusión se tendría que aprobar, y tampoco se trata de sembrar dudas y confusión en un sistema educativo en el que la Logse acaba de em-

pezar a aplicarse; pues bien, en el caso de que se llegase a esa conclusión de que es necesario cambiar algo, ¿no tendrían que decir también sus opiniones las Comunidades Autónomas?

Resumiendo, el Ministerio de Educación y Cultura tiene derecho a revisar y cambiar, si lo cree necesario, las enseñanzas mínimas, ¡No faltaría más! Es evidente. Pero también tiene el deber de hacerlo de acuerdo con las Autonomías, deber legal y deber político, y política con pe mayúscula, de verdadera política de Estado. En cambio, en este caso, el Ministerio ha puesto el carro delante de los bueyes, y el ingenio no funciona ni funcionará si no se cambia el orden; se ha de proceder primero a poner los bueyes, es decir, el diálogo, el consenso, porque hay cuestiones tan delicadas en las que no se puede avanzar realmente si no hay este consenso; y luego los contenidos, pero en segundo lugar.

Nuestro Grupo valora positivamente el hecho de que se explicita en el punto 4 —antes era el punto 2— de la enmienda final la voluntad de diálogo. Lo valoramos positivamente. Estamos un poco desorientados porque se insiste mucho en el espíritu de diálogo y de escrupuloso respeto, cuando se acaba de irrumpir abruptamente en la cacharrería. Sin embargo, valoramos positivamente este cambio de actitud.

Subsisten, no obstante, dos objeciones, que son básicamente las mismas que estaban en el documento de los cuatro consejeros de Cataluña, del País Vasco, de Andalucía y de Canarias, que nos impiden votar a favor de la transacción final.

En el punto uno de la transacción final se da por hecho que el sistema actual no funciona. Me parece una tesis un tanto aventurada y muy injusta para tantos profesores y profesoras que hacen una labor educativa muy meritoria. Puede haber errores y defectos, evidentemente, pero también hay aciertos y aspectos positivos. A veces me parece que entre polémicas estériles y juicios aventurados, más que ayudar al sistema educativo lo que se pretende es desacreditarlo.

Primero hemos de ver en profundidad qué es lo que no nos gusta del sistema educativo actual, que acaba de empezar a aplicarse, frente a aquello que sí nos gusta. Por eso, el punto dos de la transacción del Grupo Parlamentario Socialista, sí que nos gusta, lo que nos sorprende es el primer punto. El punto segundo trata de realizar una valoración rigurosa, lo que es correcto, pero el primero dice que hay que corregir el sistema para que los alumnos tengan los elementos básicos de la cultura, como si ahora no los tuvieran, como si la labor que hacen actualmente los profesores no sirviera para nada. Me parece injusto para los profesores y para el sistema educativo actual. También ha hecho alusión a este segundo punto el Senador Iglesias. Nosotros pensamos que no es correcto, si se quiere que exista un diálogo leal y sincero, como se anuncia en el punto cuatro, que se entre en la reunión con una propuesta escrita hecha pública anteriormente. Nos parece que para que esta voluntad de diálogo sea creíble se debería aparcar dicha propuesta, se debería dejar en suspenso, poner entre paréntesis, o, como ha di-

cho el Senador Iglesias, poner en el congelador. Mientras esto no se diga explícitamente —y no pasaría nada porque entra dentro de la negociación, y cuando una cosa se ha hecho con desacierto, se corrige el rumbo para acertar—, mientras no haya la voluntad explícita de dejarla aparcada, mientras no se haga la valoración y mientras no se consulten los demás temas, nosotros no podremos estar de acuerdo con la propuesta que se nos hace.

Como ya ha insinuado el Senador Albístur, creo que hoy se ha perdido, señora Ministra, señores senadores del Grupo Parlamentario Popular, la oportunidad de que fuese un gran día para el Senado, igual que hace poco tiempo perdimos la oportunidad de que fuese un gran día para el Senado con la creación del Consejo Superior de los medios audiovisuales. Hay un clamor cada vez mayor de la necesidad de ese Consejo Superior de los medios audiovisuales, y lo pudimos aprobar en esta Cámara, aunque seguramente se aprobará en el Congreso. Ahora se podría aprobar esta propuesta, modificando el punto primero, que creo que es injusto para el sistema actual, y con la voluntad añadida de aparcar el tema propuesto hasta que no se haga la valoración rigurosa y hasta que, codo a codo con las Autonomías, avancemos y lleguemos a las conclusiones.

Podríamos haber estado de acuerdo con esta propuesta global —quizá también otros grupos— y haber alcanzado la unanimidad en un tema tan esencial, tan querido para nosotros como es la enseñanza de las Humanidades. Es una lástima que haya desacuerdo en este punto.

Sin embargo, para acabar en positivo, algo se ha mejorado en relación con la propuesta inicial, que es la voluntad de hacer esta evaluación rigurosa, y también la voluntad de este diálogo y escrupuloso respeto con las Autonomías, lo que parece evidente, aunque en ese caso anterior no se haya cumplido. Por tanto, hay algunos avances. Esperemos que en las próximas semanas podamos continuar el diálogo y llegar a un resultado satisfactorio en un tema —insisto— muy vital para todo el Estado español.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Varela.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Iglesias Marcelo.

El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señora Ministra, señorías, abrigo la esperanza de que las palabras que he escuchado en la tribuna hace unos minutos en representación del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió* y de alguna parte del Grupo Parlamentario Mixto, que ponen algunas objeciones al acuerdo transaccional que han firmado los Grupos mayoritarios de la Cámara, el que apoya al Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista, permitan que en un futuro no muy lejano ese consenso sobre el procedimiento, y espero que sobre el final del procedimiento, sea posible. Como digo, han puesto alguna objeción y tienen razón en expresar sus reservas.

¿De qué estamos hablando? ¿Por qué discutimos la enseñanza de la historia y no discutimos la enseñanza de la geografía, que está en el mismo Decreto, y la enseñanza de la lengua, que está en el mismo Decreto, y la enseñanza de la literatura, que está en el mismo Decreto, y que tienen propuestas igualmente importantes en cuanto a su contenido?

¿Por qué hablamos de la historia? Por una razón política. Porque cuando estamos hablando de la historia, estamos mirándonos a nosotros mismos, estamos viendo lo que somos, constatando las credenciales, viendo los certificados de garantía y naturalmente dibujando el futuro.

Cuando discutimos el programa de la historia en la Enseñanza Secundaria, estamos discutiendo el proyecto de futuro que distintos Grupos políticos tienen presente y que defienden legítimamente. Por eso es tan enormemente tenso, profundo y difícil el debate, y profundo, tenso, difícil el acuerdo.

Haciendo una caricatura, diría que estamos moviéndonos entre dos posiciones extremas: por un lado, una vieja concepción de la historia, que a mí me tocó padecer en el viejo bachillerato que estudié a principios de los años cuarenta; una concepción de la historia de lectura única, con visión única y con protagonistas únicos; aquello, que a mí me pareció siempre una mala comedia, con malos actores y con un final absolutamente desastroso sería una de las caricaturas extremas de las alternativas en las que estamos.

Por otro lado, en el extremo contrario, una concepción de la historia de España, de la historia en la que cada uno de nosotros se apoya y crece, como algo absolutamente distinto de la historia de los de al lado, de los demás allá; cada uno teniendo su propia historia como una parte de sus credenciales de identidad, su lengua, su cultura, su historia, su proyecto político y su voluntad política. Esto define un territorio cuyas fronteras no querríamos ver traspasadas por nadie.

En medio de esas dos concepciones: una, según la cual esa hipotética historia de España debería ser como una enciclopedia por fascículos, con capítulos que se van adicionando unos a otros, sin interrelación ni conexión ninguna, o esa otra historia absolutamente de lectura única, sin matices, como si fuera una cosa sola, con una sola visión y una sola mirada, ¿hay posibilidades de encontrar caminos intermedios? Hay posibilidades de encontrar caminos intermedios. Hay posibilidades de acuerdo que ya se han dado en el pasado y que se pueden volver a dar en el futuro, y esos caminos del acuerdo deberían cumplir, por un lado, las condiciones de posibilidad del acuerdo, y se lo voy a expresar con claridad a la Cámara. Para que un acuerdo sea posible tiene que cumplir los siguientes requisitos. Primero, tiene que respetar el dibujo competencial que establece la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, el dibujo estricto de las competencias del Gobierno, las capacidades de las Comunidades Autónomas, y recuerden sus señorías que éstas establecen el currículo en su totalidad, con la participación necesaria de los contenidos básicos o enseñanzas mínimas que el Gobierno es-

tablece y la capacidad de programación de los centros, de los equipos de profesores y del profesor del aula, que es quien, en definitiva, dirige la tarea del trabajo de la clase. Estas condiciones tienen que cumplirse con un respeto escrupuloso, y sobre ese fondo, ¿qué es lo que nuestro Grupo piensa? ¿Cuál es su posición? Quiero decirlo aquí con absoluta claridad. Quiero que nuestra posición quede expresada con precisión, de forma absolutamente nítida.

Ninguna concepción de un proyecto educativo puede cerrarse a la necesidad de comprobar, reexaminar y rectificar lo que es su contenido. Principio elemental de la ciencia: Hacemos una hipótesis, la comprobamos; si va mal, rectificamos; si va bien, nos reafirmamos. Verdades que son siempre provisionales, rectificaciones a largo plazo. Negación absoluta de nuestro Grupo de cualquier concepción de la Historia que implique cualquier manipulación o falsificación de ella. La negativa absoluta a convertir la Historia en una fuente de mitos. Sobre falsedades y mentiras no se puede edificar ninguna verdad. Ningún proyecto político digno de tal nombre puede estar sustentado sobre la base de una debilidad de esa naturaleza.

Pero, una vez acotado el territorio de lo que no debe ser Historia, porque no es admisible la manipulación ni la falsificación, la Historia es siempre el resultado de miradas plurales, de visiones diferentes, y quien mira es siempre el ojo de un historiador o de un equipo que ve la realidad, la construye y la estructura con arreglo a sus propias maneras de pensar y, por lo tanto, no existe una verdad objetiva única y definitiva para la Historia, sino que siempre es provisional, siempre está sujeta a revisión.

En el esquema de modificación de enseñanzas, los aspectos científicos del contenido y que hacen referencia a la enseñanza tienen que estar complementados con los aspectos del aprendizaje. Enseñanza sin aprendizaje no es nada. Ciencia que fundamenta la enseñanza sin psicología y pedagogía que estructuran el aprendizaje, no es nada. Psicología sin ciencia, pura evanescencia. Ciencia sin contemplar quién tiene que aprender, lo que puede aprender y lo que debe aprender, no es nada. Ambos excesos los hemos padecido durante mucho tiempo, y ya es hora de que seamos capaces de integrar la visión científica, por un lado, y la visión pedagógica y psicológica que el alumno requiere para que el proceso del aprendizaje pueda llevarse a efecto.

¿Por qué hablamos de la enseñanza de las Humanidades? ¿No recuperamos en este debate el sentido del humanismo, el sentido de las Humanidades? ¿Por qué no hacemos presente en este debate, en esta Cámara, aquello de lo que estamos hablando como de telón de fondo: el sentido del humanismo? El sentido del humanismo en qué, cómo, en qué dimensión. ¿En la dimensión clásica de lo que es el Humanismo? En la consideración del ser humano como el centro de una referencia de la existencia en la que ni los dogmas ni las verdades absolutamente sagradas, indemostrables, son capaces de alterar o de influir en el ser humano, en el compromiso del hombre

con su propia existencia y en el compromiso del hombre con las existencias de los demás y, sobre todo, en una cosa absolutamente fundamental, como elemento central del Humanismo y de las Humanidades, la capacidad y la exigencia de reconocernos los unos a los otros en lo que tenemos en común y en lo que tenemos de diferentes.

Mientras los hombres no nos reconozcamos en las mujeres como aquello que, de alguna manera, complementa lo que somos, mientras los occidentales no nos reconozcamos en los que no lo son, los blancos en los negros, los de África en los del Mediterráneo, mientras no seamos capaces de ver en los otros algo común a nosotros y algo diferente, sabiendo que esa diferencia nos fundamenta y estructura, mientras no tengamos un sentido amplio de lo que es el ser humano, capaz de integrar una enorme totalidad de cuestiones, el Humanismo será algo de boquilla, pero no una cuestión real.

En aras de esa consideración de los valores humanísticos en la enseñanza yo hago el planteamiento a la Cámara de que la propuesta de resolución que hemos firmado algunos grupos, supone un avance en la búsqueda de una solución correcta de los problemas y permitirá retomar el tema con la colaboración necesaria, no prescindible, de todos los actores importantes, entre ellos las Comunidades Autónomas, los profesores y las comunidades científicas, y es por tanto un avance que, de alguna manera, exigirá, señora Ministra, que el proyecto de Real Decreto se quede entre paréntesis, se quede congelado durante algún tiempo, porque si prosigue su tramitación sin tener en cuenta el consenso alcanzable y esperable de esta propuesta de diálogo no habremos ido a ningún sitio y la crispación volverá, cosa que yo no deseo y por la que no apuesto.

Muchas gracias. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Iglesias Marcelo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Fernández Rozada.

El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, señora Ministra, he seguido, al igual que sus señorías, muy atentamente el debate que se ha suscitado en el turno de portavoces. A mí me parece muy importante que pasemos, después de la aprobación de esta moción en la que instamos al Gobierno a impulsar un plan de mejora de las enseñanzas de las Humanidades, al debate real, que aparquemos el debate político y que todos juntos seamos capaces de conseguir ese objetivo que ha impulsado la acción del Gobierno a través del Ministerio de Educación y Cultura en el último año: la fijación de unas enseñanzas mínimas que permitan cumplir los objetivos aquí deseados por todos y cada uno de los portavoces intervinientes porque, señorías, nadie está en contra de hacer algo, de reformar las Humanidades, pues en estos momentos el actual currículum de enseñanzas mínimas resulta impreciso o vago. Pero, no es menos cierto que el debate de fondo que aquí se quiere trasladar ha pa-

sa a condicionantes de mera actuación política partidista, que es justamente lo que nuestro Grupo —recordarán mi primera intervención— ha querido evitar. Nosotros entendemos que no se trata de retirar el proyecto, señor Román y señora De Boneta. El Gobierno aún no ha aprobado nada; ha hecho de forma impecable lo que, a mi juicio, debía de hacer: someter a la comunidad educativa, a la científica, al profesorado, a la comunidad social en general, un proyecto de decreto para que, a través del diálogo y del mayor acuerdo posible, acuerde la fijación de esos mínimos en las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria que, efectivamente, aquí nadie ha cuestionado que es su exclusiva competencia.

Por tanto, partiendo precisamente de ese espíritu constructivo, abierto y de diálogo, he de decir que a nuestro Grupo no le ha movido otro interés al traer aquí esta moción que el de que entre todos fijemos una serie de puntos que puedan instar al Gobierno a seguir acometiendo, en lo que a este asunto se refiere, lo siguiente: en primer lugar, impulsar un plan de mejora de las enseñanzas de las Humanidades. Todos estamos de acuerdo en ello. En segundo lugar, realizar una evaluación rigurosa de la situación actual de la enseñanza de las Humanidades. Yo he visto y oído declaraciones públicas de la propia Ministra en este sentido, declaraciones que pueden ser conocidas por quienes quieran acercarse a la realidad de lo que ha supuesto en este último año la aparición en escena de la reforma de las Humanidades. El tercer punto que se ha logrado con este acuerdo es el instar al Gobierno a que facilite e impulse el amplio debate social que sobre la enseñanza de las Humanidades en Educación Secundaria se ha iniciado con el objetivo de alcanzar el mayor consenso posible. En cuarto lugar, y en relación con la reforma de estas enseñanzas, se intenta alcanzar un deseable acuerdo con el mayor espíritu de diálogo y con un escrupuloso respeto a las competencias del Gobierno, por una parte, y a las de las Comunidades Autónomas, por otro. En quinto lugar, intensificar en el seno de la Conferencia de Educación la consulta y participación de las Comunidades Autónomas a través de las Comisiones o equipos que proceda en el desarrollo del plan de mejora de las Humanidades. Por cierto, que también se dice que las Comunidades van a poder incorporar nuevos expertos que de alguna forma eviten el planteamiento cautelar de algunos grupos en torno al sentido que muchos de los que están en las Comisiones —lo dicen algunos grupos— pueden tener en una dirección determinada. Hagámoslo abierto, pero hagámoslo entre todos.

En materia de educación hemos dicho aquí lo mismo que decíamos antes, señor Iglesias, y creo que su señoría lo recordará. Antes de ser Gobierno también fuimos oposición durante muchos años, y ahora nos gustaría seguir manteniendo en ese planteamiento la misma coherencia que manteníamos cuando estábamos en la oposición.

Dígame un solo dato que pueda permitir hablar de incoherencia por nuestra parte, dígame un solo dato que demuestre que, estando primero en la oposición y ahora en el Gobierno, no hemos manifestado en éste y en otros asuntos con claridad meridiana ahora lo mismo que antes

manifestábamos. Efectivamente, eso debería ser motivo para que reflexionaran muchos de los que, saliendo a esta tribuna, se olvidan de la historia reciente en relación con lo que fueron los debates para la reforma de las enseñanzas, sobre todo en esa amplia profusión legislativa que en materia de educación desarrolló el Partido Socialista.

Podríamos, efectivamente, llegar a un punto de encuentro en el que usted, señor Iglesias, pudiese admitir por medio de planteamientos objetivos la veracidad de lo que digo: que el proceso que se ha seguido desde hace más de un año para poner en marcha el mecanismo que permita la mejora de las Humanidades ha sido impecable.

Y no quiero traer aquí a colación, ni tampoco quiero retrotraerme a la historia, lo que significó a lo largo de la década de los ochenta aquel planteamiento que para el debate en materia de educación pusieron en marcha los diferentes Ministros socialistas, planteamiento que por mi parte fue denunciado y que giraba en torno a una serie de acontecimientos y de hechos que se basaban más en hipótesis y en cuestiones que nos contaban que en la realidad de la comunidad educativa, que veía cómo el profesorado no se vinculaba a todo ese proceso.

Hemos superado ese trámite. Por tanto, con un escrupuloso respeto al contenido de la ordenación general del sistema educativo, y un riguroso y escrupuloso respeto hacia la llamada al diálogo y el acuerdo, profundicemos en los objetivos que hay que cumplir en esas enseñanzas mínimas con la reforma de las Humanidades, pero nunca congelemos o retiremos algo que el Gobierno no ha probado. Por otro lado, el Gobierno —en este caso, a través del Ministerio de Educación y Cultura— no ha cerrado una sola puerta a este proceso abierto; por tanto, díganme sus señorías si no se puede retomar una situación para modificar o retirar aquello que no nos gusta, de acuerdo con los planteamientos y objetivos que aquí se exigen.

¿Por qué no nos podemos incorporar a este proceso con espíritu constructivo, tal como nuestro grupo está pidiendo, olvidándonos de un debate político, o de la derrota política que pueda significar la retirada de un proyecto, que no es más que eso: un proyecto, que puede ser enriquecido por todos nosotros?

Hay voces desde el Grupo Mixto que condicionan todo a la retirada de algo, y no acabo de entender por qué. Más bien entiendo que trasladan a la Cámara un debate político con «P» mayúscula, como le suele gustar manifestar al señor Varela. Desde luego, el espíritu de la moción no mueve a eso, sino precisamente a que, si un proceso está abierto, puede enriquecerse, y no hay puertas cerradas, vayamos en esa dirección; y a ese respecto, conocemos la sensibilidad del Gobierno y, en particular, de la señora Ministra de Educación. Desde esa perspectiva, incorpórense y voten favorablemente estas propuestas, porque van a estar mejor en ese proceso —que instamos al Gobierno que cumpla—, que no fuera de este gran acuerdo que hoy se va a conseguir en el Senado.

En cuanto a los señores Albístur y Varela —y aunque ya tuve ocasión de indicárselo al señor Albístur antes de este debate—, quiero decirles que las nuevas enseñanzas mínimas hacen un especial hincapié en reflejar la reali-

dad plural de España en lo cultural, en lo histórico, en lo literario y en lo lingüístico. Es más: se intenta acercar lo más relevante de la Historia —la lengua y la literatura de cada Comunidad— al conjunto de las enseñanzas mínimas, de manera que todos los escolares conozcan las singularidades más destacadas de otros puntos de España. No se pretende dar una visión unitaria en el sentido político. Por el contrario, el proyecto establece que los alumnos, a través de la enseñanza de la Historia que reciban, comprendan los acontecimientos históricos comunes que se han desarrollado en los territorios que hoy constituyen España. Desde luego, señor Iglesias, no se pretende decretar una única manera de explicar y entender la Historia; en absoluto. Y tampoco desconocer la pluralidad cultural y las características singulares de cada Comunidad Autónoma, señores Albístur y Varela.

El objetivo —que estoy seguro que compartirán los Gobiernos autonómicos— consiste en mejorar la formación educativa y cultural de todos los estudiantes españoles. No busquemos otro trasfondo; quedémonos ahí, e incorpórenos a lo que hoy se va a lograr, y es bueno, en el Senado.

Creo, que al igual que hemos conseguido un acuerdo unánime en la reforma del acceso a la universidad, aquí también deberíamos tener un acuerdo que permitiese instar al Gobierno en los cinco puntos de la moción porque, a buen seguro, en un porcentaje elevadísimo va a cubrir satisfactoriamente la inquietud legítima de cada Grupo Político que ha manifestado aquí su postura. Desde luego, como no la va a poder cumplir va a ser quedándose fuera y manifestando efectivamente algo contradictorio. Por ejemplo, aquí se ha dicho por parte del señor Varela que, por una parte, reconoce la exclusiva competencia del Gobierno en esta materia y, a continuación, manifiesta que irrumpimos brutalmente en la comunidad.

Por tanto, señorías, yo creo que estamos en un momento en el que se acaba la confrontación política y se pasa al debate real. La comunidad educativa, señorías, tanto mi Grupo como yo entendemos que lo va a agradecer. Se ha actuado con un gran sentido de la responsabilidad en la búsqueda de este acuerdo que aquí conseguimos hoy en el Senado. A partir de ahora, ¿qué nos queda? Que con serenidad se vaya al cumplimiento de esos objetivos, trabajando juntos y, por tanto, señor Iglesias, olvidemos palabras como confrontación, tengamos más presente el diálogo, no hablemos de resultado intocable, están las puertas abiertas, no hay en estos momentos más interés y ánimo constructivo que el poder lograr juntos estos objetivos, que desde hace más de un año viene buscando la señora Ministra con compromisos que parten, como decía en mi intervención, de nuestro programa y de la investidura.

Por ello, quiero finalizar pidiendo a todos los grupos de la Cámara que no se han unido a esta propuesta de modificación que hemos hecho, que se unan, que no vean en ella más que el espíritu constructivo, un ánimo abierto, emprendedor hacia el diálogo y hacia el acuerdo, que ha sido siempre lo que ha caracterizado la posición del

Gobierno y, especialmente —por qué no decirlo—, de nuestra señora Ministra de Educación y Cultura.

Nada más y muchas gracias. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Fernández Rozada.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 231: a favor, 207: en contra, 20: abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE, EN EL PLAZO DE TRES MESES, PREVIA NEGOCIACIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES, APRUEBE EL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD MINERA (662/000103).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno para que, en el plazo de tres meses, previa negociación con los agentes sociales, apruebe el Plan Nacional de Seguridad Minera.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el portavoz del Grupo firmante de la misma. (*El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tiene la palabra el Senador Alonso Buitrón.

El señor ALONSO BUITRÓN: Gracias, señor Presidente.

Tengo que iniciar esta intervención pidiendo disculpas de antemano a la Cámara porque después de un debate de tan alto nivel intelectual, Señorías —y lo digo seriamente—, temo en este momento procesal no estar a la altura de las circunstancias.

Señorías, lo que nos trae hoy aquí, es un tema de gran trascendencia para una población que vive cada pocos días desgracias en las minas. La moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista pretende, de alguna manera, desbloquear — palabras del propio Ministro de Industria— el Plan de Seguridad Minera que se encuentra desde hace varios meses, más de 16, paralizado en unas negociaciones entre la representación sindical y la empresarial. Este bloqueo parece ser que hace referencia a la figura del Inspector Técnico Sindical de Minas, que es el punto de discrepancia.

He de decir, señor Presidente, que si sólo fuera esto, posiblemente el Grupo Socialista no habría traído hoy esta moción a la Cámara. Pero nosotros intuimos, percibimos, que no sólo es esto. Estamos viendo que falta algo

de voluntad política para que este plan de seguridad minera salga a la luz. Podíamos, señor Presidente, haber presentado una interpelación. Hay materia para ello. Pero nuestro grupo, al hablar de un tema tan sensible como es la vida de los trabajadores que mueren en la mina, no quería excesiva publicidad. Queríamos sencillamente que se desbloqueara y que, de una vez por todas, ese plan nacional de seguridad minera viera la luz.

Señor Presidente, seguramente todos hemos oído hablar de la dureza del trabajo en la mina. Y es así; puedo dar fe de ello. Pasar la jornada entera en las entrañas de la tierra ya de por sí es duro, pero es que, aparte de eso, estos trabajadores sufren otro tipo de secuelas y consecuencias. Un obrero que trabaja unos 20 años en una mina, va a estar expuesto a riesgos tales como situaciones de mala ventilación, de gases muchas veces producidos por la dinamita y por los propios materiales que se extraen, y a las partículas de polvo en suspensión, que es de lo que se deriva esa terrible enfermedad que es la silicosis.

Por tanto, el obrero que trabaja en la mina, aunque no sufra ningún accidente, a la larga va a padecer secuelas: va a sufrir del estómago o de bronquitis o de silicosis.

Pero es que a esto, señorías, hay que unir otro tipo de problemas y graves riesgos que comporta trabajar en la mina, como los hundimientos, las explosiones de grisú, etcétera, riesgos muchas veces imprevisibles —aunque en muchas ocasiones no lo son— que provocan accidentes que muchas veces causan escalofríos. Los datos de los que yo dispongo de los diez últimos años sobre accidentes mortales en la minería evidencian de qué estamos hablando.

En el año 1986 en la minería del carbón hubo 29 trabajadores muertos; en la minería metálica, uno; en la minería no metálica, uno; en la minería de canteras, siete. Total, 38 trabajadores perdieron la vida en el año 1986. Si damos un salto de diez años, señor Presidente, tenemos que en el año 1996 los trabajadores que fallecieron por accidentes en la minería del carbón son los mismos que diez años atrás, 29; en la minería metálica no hubo ninguno; en la no metálica, dos, y en canteras, nueve. Total, 40 trabajadores fallecidos en toda la minería. Pero hay que tener en cuenta el siguiente análisis: en el año 1986 perdían la vida en la minería del carbón 29 trabajadores, con 46.000 mineros en activo. Diez años después se pierden las mismas vidas humanas, sólo con 25.000 trabajadores en activo, o sea, casi con la mitad de mineros hemos tenido los mismos accidentes. No estoy echando la culpa a nadie, señorías, ni mucho menos; estoy poniendo de relieve que hay un Plan de Seguridad Minera al que lo antes posible hay que dar una salida, porque estamos viendo la relajación que han venido teniendo las Comunidades Autónomas en materia de seguridad minera.

Hemos visto —y así lo decía la Comisión que se creó para hacer un estudio sobre «La seguridad en las minas españolas —que así se llama ese estudio— Análisis y propuestas» —que en las Comunidades Autónomas no existe en este momento ningún tipo de estadística en cuanto a visitas o inspecciones giradas por la autoridad

laboral a las minas para detectar posibles situaciones de peligro; no existe ningún tipo de estadística en esta materia. Señorías, este Plan es importantísimo y entre todos tenemos que tirar de él hacia adelante.

Decía antes que podíamos estar ante una situación de falta de voluntad política y yo, desde esta tribuna, quiero exponer cuáles son nuestras dudas.

En el Plan de la Minería del Carbón y Reactivación de las Comarcas Mineras que se firmó en julio de este año, en la página 23, en la parte dedicada a seguridad minera, se acuerda entre los sindicatos y el Ministerio de Industria dedicar anualmente 2.000 millones de pesetas para la seguridad minera: 1.000 millones para el Plan Nacional de Seguridad Minera y 1.000 millones para afrontar proyectos por las empresas mineras destinados a la seguridad minera. Pues bien, señorías, analizados los Presupuestos Generales del Estado tengo que decir que este acuerdo no se ha cumplido. Según mis cuentas, para dar cumplimiento a este compromiso adquirido por los sindicatos y el Ministerio de Industria me faltan, al menos, 733 millones de pesetas de los presupuestos, porque las partidas que figuran en ellos son las siguientes: Plan de la minería, Plan de seguridad minera, transferencias a Comunidades Autónomas, 166 millones de pesetas; exploración, ordenación y seguridad minera para las empresas públicas, 100 millones de pesetas; exploración y ordenación minera —esto no es seguridad minera— para empresas privadas, 900 millones de pesetas; y seguridad minera para empresas privadas, 1.000 millones de pesetas.

Señorías, si hacemos la cuenta, lo que verdaderamente tenemos para la seguridad minera son 1.266 millones de pesetas, redondeando me falta 733 millones. Por eso digo que la voluntad política en este caso se puede poner en duda.

Tengo que decir lo mismo en cuanto al Convenio Internacional y el Convenio de la OIT en cuanto a medidas de seguridad, que fue ratificado en esta Cámara y que no ha sido todavía traspuesto a la normativa española. Estoy totalmente convencido de que, de haberse traspuesto ya a nuestra normativa, al Reglamento de normas básicas de seguridad minera y a las ITC, las instrucciones técnicas complementarias, ya estaría dando sus frutos, porque este Convenio innovaba, entre otras cosas, que todas las vías mineras, todas las minas debían tener dos bocas de salida. Y desde que este Convenio se aprobó se han producido accidentes debido a que los trabajadores mineros no tenían dos sitios por donde salir.

Existen sistemas de comunicación para comunicarse interiormente, y muchas empresas todavía no los tienen. Hay situaciones en las que se ve venir un peligro y si no hay forma de comunicarse entre unos centros de trabajo y otros, entre unos trabajadores y otros, se producen las desgracias.

Otra innovación es la de hacer inspecciones periódicas sobre polvo y grisú, y las Comunidades Autónomas no practican este tipo de inspecciones, sólo se hace la inspección el día que ocurre el accidente. Y el día que ocurre el accidente, evidentemente, hay que hacerla, pero se tendrían que realizar antes para hacer prescripciones so-

bre situaciones peligrosas que hay que corregir. Esto ahora mismo no se está haciendo. Sí se hacía antiguamente, porque había una policía minera que se encargaba de todas estas materias.

Deben tener sistemas de evacuación, según el artículo 12 de este Convenio. Desde mi punto de vista, uno de los problemas que existía en la minería en cuanto a las empresas subcontratadas, es que no se sabía bien de quién era la responsabilidad, si de la empresa subcontratada o de la empresa propietaria de la mina. Este Convenio también despeja esta situación.

En cuanto a derechos de los trabajadores, también es importante que los representantes de los trabajadores puedan pedir inspecciones cuando vean una situación peligrosa, y que no solamente se limiten a pedir las, sino que sean concedidas, que la autoridad laboral obligatoriamente tenga que girar una inspección para ver si es cierto que existe una situación de peligro. Cuando este Convenio se ponga en marcha la autoridad laboral visitará las empresas mineras para hacer inspecciones, y el hecho de que los representantes de los trabajadores estén presentes en esas visitas o cuando voluntariamente las quiera hacer la empresa, desde mi punto de vista, señorías, es importante.

En definitiva, señor Presidente, el Grupo Parlamentario Socialista en varias ocasiones ha planteado preguntas parlamentarias al propio Ministro de Industria tanto en Comisión como en el Pleno de esta Cámara, y cree que es excesivo el tiempo que lleva este Plan sobre una mesa negociándose y tratando de llegar a un consenso. A nosotros nos parece bien que se consensue, pero cuando de lo que se está hablando es de vidas humanas, el Gobierno debe gobernar. Porque este plan tiene su origen en el accidente gravísimo que tuvo lugar el día 31 de agosto de 1985 en el pozo San Nicolás, de Asturias, donde perdieron la vida 14 trabajadores mineros. Este accidente dio origen a una comparecencia del entonces Director General de Minas, don Jesús Candil, en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, comprometiéndose a elaborar un informe sobre seguridad minera —que es el informe sobre la seguridad minera en las minas españolas, análisis y sus propuestas—, que ha dado origen a ese Plan de Seguridad Minera. Así lo había anunciado para, a continuación, afrontar la elaboración y preparación del Plan de Seguridad Minera.

En el mes de junio del año 1996, la Comisión Nacional de Seguridad Minera afronta por primera vez en su seno el debate de este Plan. Más tarde, la Directora General de Minas, que comparece en la Comisión de Presupuestos el día 22 de noviembre de 1996, hace ya un año, a una pregunta de un Senador socialista sobre este mismo tema nos anuncia que el Plan está prácticamente terminado, que la Comisión Nacional de Seguridad Minera se reúne el día 29 de ese mismo mes de noviembre de 1996 y que cree que, en breve, el Plan ya será una realidad.

Señor Presidente, el Ministro de Industria, el pasado día 19 de noviembre, en esta Cámara nos volvió a decir que iba a urgir esta materia, porque consideraba que verdaderamente era importante que este Plan de Seguridad

Minera se aprobara. A pesar de todo esto, hoy el Plan sigue sin estar aprobado.

Para concluir, señor Presidente, solamente deseo decir una cosa. Si de aprobarse hoy esta moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista solamente contribuyéramos a evitar que una vida humana se perdiera, señor Presidente, creo que habríamos hecho una buena labor. Por ello, les pido a todas sus señorías, a todos los Grupos Parlamentarios, que apoyen la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista.

Muchas gracias. (*Aplausos.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Alonso Buitrón.

A esta moción se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra el Senador Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor Presidente.

Como acaba recordar el Senador del Grupo Parlamentario Socialista, señor Alonso Buitrón, la moción que debatimos en este punto del orden del día tiene que ver con la seguridad minera.

Yo quisiera comenzar mi intervención con un recuerdo para las víctimas del accidente que hoy mismo ha tenido lugar en una mina de carbón rusa, en la región siberiana de Kemerovo, que a las siete de la mañana, hora española, se cobró la vida de al menos 60 mineros.

Aunque la historia de la mina está jalonada de estos dramáticos accidentes, siempre resulta escalofriante recibir estas noticias que sacuden nuestra sensibilidad y que justifican la necesidad permanente de establecer medidas de seguridad que hagan disminuir al máximo los riesgos laborales.

Qué duda cabe que los accidentes laborales, sea cual sea su origen, causa o incluso su lugar, despiertan en nosotros un conjunto de sentimientos y emociones que, cuando tienen por escenario la mina, el fondo de la tierra, cobra mayor intensidad por las difíciles y durísimas condiciones del trabajo y el inevitable recuerdo de tantas y tantas víctimas que dejaron su vida en el interior de un pozo o salieron gravemente dañados, física o psíquicamente, de los mismos.

Si a eso añadimos la singular tradición de regiones, provincias o comarcas mineras y el especial carácter que alimenta el espíritu de sus gentes, es evidente que nos encontramos ante un tema que suscita un gran interés.

La seguridad en la minería y todo lo relacionado con el carbón siempre ha sido una cuestión prioritaria para el Partido Popular, bien en el Parlamento de la Nación, bien en los Parlamentos Autonómicos, bien estando en la oposición o estando, como ahora estamos, en el Gobierno. Siempre hemos considerado la importancia de las medidas que afectan al sector y muy especialmente aquéllas relativas a la seguridad e higiene en las minas.

Hemos aportado siempre nuestra visión del problema, porque consideramos que es un deber específico de nuestra acción política, y por eso lo hemos incluido en nues-

tros programas electorales y también en los programas de acción de gobierno; y lo hemos hecho con ánimo de unir nuestro criterio y nuestro enfoque a los de todos aquellos que tienen algo que aportar, porque si un asunto tiene que plantearse con una visión general ése es el de la seguridad minera. Todos podemos y debemos aportar nuestra visión parcial del asunto: los partidos políticos, los trabajadores a través de sus representantes, las Comunidades Autónomas, etcétera, y de la conjunción de esfuerzos, con ese afán de unir, saldrá una visión completa del tema.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular y, sin lugar a dudas, el Gobierno al que apoyamos quieren un plan nacional de seguridad minera que sustituya al que se diseñó en 1987 que, como recordarán, recibió los parabienes de esta Cámara en un dictamen elaborado y votado unánimemente en 1988. Entonces se consideró que la normativa era suficiente y adecuada y, en opinión nada sospechosa, también lo era más de siete años después, cuando el entonces Ministro Eguiagaray afirmó que se habían producido desarrollos constantes en la legislación, en esa articulación entre normativa básica y normas complementarias.

Estas afirmaciones del entonces Ministro de Industria se realizaban meses después de producirse la catástrofe del pozo San Nicolás, y están recogidas fielmente en el «Diario de Sesiones». Fue precisamente, como recordaba el Senador socialista, a raíz de ese accidente en el pozo San Nicolás cuando se impulsó, con el apoyo de todos los grupos políticos, la redacción de un documento titulado «La seguridad minera, análisis y propuestas», en el marco de la Comisión Nacional de Seguridad Minera, y más concretamente en el marco de una subcomisión en la que están representados las Comunidades Autónomas, los agentes sociales y los representantes técnicos y científicos, además del propio Ministerio de Industria y Energía.

El portavoz socialista ha hecho una relación de fechas que yo creo que tiene que ser corregida. En primer lugar ha dicho que este plan, el plan que tenía que impulsar esta Comisión Nacional ha sido bloqueado durante dieciséis meses. La cifra no es exacta; el plan está bloqueado desde finales de noviembre de 1996, y además conviene insistir en que todas estas cosas se dilatan en el tiempo porque el trabajo serio y riguroso exige un tiempo, un ritmo que se demuestra haciendo un repaso de las fechas.

El accidente se produjo en el año 1995, a finales de agosto, y el Ministro compareció a finales del mes de octubre; la subcomisión para analizar el plan se crea en noviembre, y la primera reunión tuvo lugar el 20 de marzo de 1996, es decir, siete meses después de producirse el accidente. Desde marzo hasta finales de noviembre de 1996, pese a las dificultades propias de un relevo de gobierno, se sigue trabajando a buen ritmo hasta el extremo de reunir al pleno de la Comisión y debatir el Plan de Seguridad Minera. Es en ese pleno donde se ponen de manifiesto las discrepancias notables entre los agentes sociales.

Señorías, en su moción hacen referencia a la comparecencia de la Directora General de Minas, doña Paloma

Sendín, hace un año en la Comisión de Presupuestos. La señora Sendín, en efecto, hizo en aquella comparecencia una pormenorizada relación del trabajo del Gobierno en materia de seguridad minera, que desmiente inequívocamente esa falta de voluntad que imputa el Grupo Socialista, y más concretamente la Directora se refirió al informe elaborado por la subcomisión creada en noviembre de 1995.

Si algo quedó patente de las manifestaciones de la señora Sendín, Directora General de Minas, es que hay una voluntad y un interés total del Gobierno por conseguir un consenso en la Comisión Nacional de Seguridad Minera, un consenso respecto al Plan Nacional de Seguridad, y a partir de ese acuerdo intentar ponerlo en marcha durante el año 1997.

Es conveniente subrayar que no se produjo ese acuerdo por la falta de entendimiento entre los agentes sociales en un punto muy concreto, que es la introducción de la figura de los inspectores técnicos sindicales. De esa falta de entendimiento se derivó un bloqueo de la situación, puesto que los sindicatos han condicionado su aprobación del documento en el que se formula un nuevo Plan de Seguridad Minera y en el que se detallan las acciones a emprender en seis líneas básicas de actuaciones.

Desde que quedaron evidentes y notorias las discrepancias entre sindicatos, empresarios y administraciones públicas, la Dirección General de Minas ha mantenido contactos con todas las partes, intentando buscar puntos de unión, puntos de acuerdo, puntos de consenso que solventaran la negativa de los sindicatos a dar su aprobación al documento que servirá de base al Plan Nacional de Seguridad Minera.

A nosotros no nos parece censurable, en ningún caso, que los esfuerzos del Gobierno hayan ido encaminados a sumar, a buscar elementos comunes de acuerdo y de entendimiento para que todos impulsemos el futuro Plan de Seguridad Minera. Es claro que si cada cual mantiene su posición no se puede echar por tierra el esfuerzo de mucho tiempo, y por eso la Subcomisión se reúne hoy mismo para hacer una evaluación de los trabajos, y el próximo día 17 se pretende convocar un Pleno de la Comisión Nacional para someter a su consideración el resultado del informe.

La preocupación para resolver todos aquellos factores que contribuyan a la eliminación de los accidentes y los siniestros es una constante común en todos los ámbitos que intervienen en la minería. En ese sentido, y mientras haya una sola víctima, cualquier esfuerzo siempre será insuficiente y nadie puede rehuir su cuota particular de responsabilidad.

Concluyo, señor Presidente, el Grupo Parlamentario Popular considera que el intenso trabajo llevado a cabo por la Dirección General de Minas para impulsar un acuerdo lo más amplio posible en el seno de la Comisión Nacional de Seguridad Minera tiene que culminar con la aprobación del nuevo Plan de Seguridad Minera, y esto tiene que hacerlo el Gobierno. El propio Ministro de Industria y Energía, Josep Piqué, en el transcurso del último Pleno, el pasado 19 de noviembre, expresó su con-

fianza en alcanzar un consenso, asumiendo, en caso contrario, la responsabilidad que le compete al Gobierno para sacar adelante el nuevo Plan. Por eso hemos presentado esta enmienda. Consideramos que en los próximos días pueden quedar definidas las posiciones en el seno de la Comisión Nacional y, consiguientemente, instamos a que se apruebe por el Gobierno el Plan Nacional de Seguridad Minera antes de finalizar el presente año. Nuestra enmienda es mucho más ambiciosa en cuanto al plazo para que el Gobierno apruebe este plan, puesto que limitamos a un solo mes lo que el Grupo Parlamentario Socialista amplía a tres meses en su propuesta.

En cualquier caso, sí dejamos constancia de que el nuevo Plan de Seguridad Minera que se apruebe por parte del Gobierno responderá al interés que, sin duda, todos tenemos en la mejora de los datos sobre la siniestralidad en la minería española.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

Han hecho llegar a esta Presidencia la noticia de que están elaborando una enmienda transaccional. Me han pedido que la espere.

Pregunto al Senador Lobo Asenjo si está firmada por todos los grupos.

El señor LOBO ASENJO: Sí, es un texto de dos líneas que se está pasando a máquina para que lo firmen los grupos parlamentarios.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): En todo caso, podemos empezar el turno de portavoces, aunque se hace un poco difícil intervenir sin saber exactamente cómo queda la enmienda transaccional. (*El señor Nieto Cicuéndez hace signos de asentimiento.*)

El Senador Nieto Cicuéndez se lanza al ruedo y entra en turno de portavoces.

El señor NIETO CICUÉNDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, creo que, independientemente de intentar transaccionar, a través de las intervenciones tanto del portavoz del Grupo Parlamentario Popular como del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista está claro que no habrá dificultad para llegar a ese consenso mínimo y necesario, porque la sensibilidad demostrada sobre el tema ha quedado puesto de manifiesto.

Quería referirme a esto precisamente porque hoy hemos estado discutiendo, en el primer punto del orden del día, la petición del Senador Ferrer sobre las perspectivas de lo que se ha conseguido en estos últimos veinte años y, sobre todo, la perspectiva de cómo avanzar y consolidar el Estado del Bienestar.

Hago esta disquisición porque me parece de suma importancia reconocer que el avance innegable que hemos conseguido en nuestro país en estos últimos veinte años ha sido, fundamentalmente, a través del esfuerzo de los trabajadores: vidas humanas perdidas, trabajo, sacrificios

enormes. Por tanto, al hablar de la seguridad, y en este caso de la seguridad en la minería, creo que es de justicia —más en nuestro país— hacer un homenaje a los mineros españoles por lo que han supuesto para el despegue industrial y para el despegue social. Por tanto, empezando por esa idea, creo que todo tipo de seguridad, toda pérdida de vida humana tiene siempre un coste, un sacrificio, una valoración, en definitiva; pero creo que en la minería debe ser doblemente correspondido, precisamente por el esfuerzo y el sacrificio que han hecho los mineros españoles en todo lo que ha supuesto la minería en nuestro país en los últimos veinte años, aunque hoy ya tenga menos importancia desde el punto de vista económico o en la renta per cápita.

Dicho esto, quería referirme a la rentabilidad, tema que siempre se menciona cuando se habla de seguridad y más ahora que estamos en un mundo en el que todo queremos medirlo. Pues bien, la mayor rentabilidad que puede haber en cualquier proceso productivo es avanzar en las medidas de seguridad. Es verdad que eso no siempre se tiene en cuenta, porque la seguridad requiere invertir, requiere dotar de medios y prevenir, y eso requiere inversión económica. Pero indudablemente no hay rentabilidad mayor, ya no solamente desde el punto de vista humano, sino también, incluso, desde el punto de vista material, de todo aquello que se invierte en seguridad. La seguridad, por tanto, aparte de lo que supone como valor fundamental de preservar vidas, de preservar enfermedades, es también un tema sobre el que tenemos que aprender todavía mucho en nuestro país porque no por casualidad somos de los primeros en accidentes en Europa, en el mundo que nos rodea.

Hay que sensibilizar efectivamente a los empresarios y a los Gobiernos, y no pueden renunciar los Gobiernos a cubrir esa función fundamental. Si, por lo que sea, los agentes sociales no se ponen de acuerdo en un tema como este de tal magnitud, el Gobierno tiene la responsabilidad ineludible de garantizar los temas de la seguridad. Creo que por ahí empezaremos a entender el mundo que nos rodea, a ser competitivos y rentables y a preservar las vidas humanas que tan necesarias nos son a todos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

El Senador Albístur tiene la palabra.

El señor ALBÍSTUR MARÍN: Muchas gracias, señor Presidente.

Fundamentalmente, mi intervención tiene como objetivo manifestar el apoyo a la iniciativa tomada por mi querido compañero Senador del Bierzo y un hombre, además, muy sensible, como lo ha demostrado tanto en el Congreso de los Diputados como en este Senado con estos temas que están todavía por terminar y racionalizar en nuestra economía.

La solidaridad que nuestro Grupo quiere manifestar con la cuestión planteada es total, porque, como es lógico, no podemos entrar, a finales del siglo XX, y en una

época con tecnologías avanzadas en otros sectores en los que gran parte de la población intenta dominar hoy día la inteligencia como un modo de vida, cuando todavía gran parte de nuestra población está intentando dominar la fuerza para seguir subsistiendo, para seguir viviendo. Tema este que a mí me parece grave y que pensamos que es digno de ser apoyado. Por eso consideramos importante el que, previa negociación, como se dice en la moción, con los agentes sociales, se termine definitivamente la aprobación del plan nacional de seguridad minera en función precisamente de la seguridad de muchas familias, de muchos individuos y de comarcas enteras del Estado.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Albístur.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Joan Horaci Simó.

El señor SIMÓ I BURGUÉS: Gracias, señor Presidente, señorías.

De todos es conocida la inseguridad con la que se viene llevando a cabo en nuestro país el trabajo en la actividad de la minería. En muchas ocasiones, los accidentes —lo han dicho antes— tienen resultados trágicos, y se vienen produciendo con una frecuencia que a todas luces es excesiva. Se hace imprescindible tratar de encontrarle remedio poniendo los medios necesarios y adoptando las medidas oportunas. Nuestro Grupo Parlamentario entiende que hace falta que, como se solicita en la presente moción, se apruebe el plan nacional de seguridad minera, un plan que aporte esa seguridad de la que tan necesitada se encuentra la actividad laboral en la minería española. Como también se ha dicho antes, nosotros creemos que una vida humana es muy importante, razón por la cual, si este plan ayuda a salvar esta vida, tiene que aprobarse inmediatamente.

Por consiguiente, tanto si se acepta la enmienda del Grupo Parlamentario Popular como si no, nuestro Grupo va a votar favorablemente a esta moción.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias. Tiene la palabra el Senador Alonso Buitrón.

El señor ALONSO BUITRÓN: Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quiero agradecer, al Senador Nieto, al Senador Albístur y al portavoz de Convergència i Unió, la sensibilidad hacia un tema que para nosotros siempre ha sido y seguirá siendo de gran trascendencia.

Deseo felicitarle también por la posición del Grupo Parlamentario Popular en el sentido de que, si esta moción ha servido para suscitar un consenso en torno a un problema grave, como lo es el de la seguridad en las minas, yo tengo que agradecer esa sensibilidad, pero no puedo de ninguna manera compartir que para el Grupo Parlamentario Popular haya venido siendo siempre prio-

ritaria la seguridad en las minas. Esto no lo puedo compartir, señorías, porque me corrigió el Senador que intervino por el Grupo Parlamentario Popular diciendo que este plan ya se sometió a una primera discusión en marzo, y mi dato era junio. O sea, que ha habido ya más de un año y medio para dar salida a una cuestión de tanta trascendencia. Problemas que, desde mi punto de vista, para el Grupo Parlamentario Socialista no tenían tanta prioridad, se han considerado prioritarios, y el Grupo Parlamentario Popular ha tirado de ello hacia adelante. Ahí está el Protocolo Eléctrico, ahí está la Ley del Sistema Eléctrico Nacional, ahí están una serie de actuaciones que para el Grupo Parlamentario Popular sí fueron prioritarias. Pero si no era prioritario o si había otro tipo de problemas, de los que este Senador no está informado, y si esta moción ha servido para que esto, de ahora en adelante, se tome de una forma seria, y ese plan nacional de seguridad vea la luz a primeros de este año, bienvenido sea.

Si por el hecho de que este plan salga somos capaces de evitar que se pierda una vida humana habremos hecho una gran labor.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Alonso Buitrón.

¿Grupo Parlamentario Popular? (*Pausa.*)

Llegamos al momento límite de la enmienda transaccional. ¿Conocen los señores portavoces de los distintos grupos el redactado de esta enmienda transaccional? No lo conocen. (*Pausa.*)

A la Mesa ha llegado una enmienda transaccional firmada por todos los grupos. Creo que todos los portavoces están de acuerdo con la misma. Debo recordarles que las firmas deben ser las de los portavoces y viceportavoces que, como veo, están adheridas a esta propuesta. ¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (*Pausa.*) Así es y así consta. Queda aprobada esta moción del Grupo Parlamentario Socialista, incluyendo la enmienda transaccional aceptada por todos los grupos.

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PRESENTAR UN PLAN DE FINANCIACIÓN, EN DOS ANUALIDADES, DE LAS NECESIDADES MUNICIPALES QUE AÚN ESTÁN POR CUBRIR EN LOS DISTINTOS PLANES DE EMERGENCIA NUCLEAR EXISTENTES EN EL ESTADO ESPAÑOL (662/000101).

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos, a continuación, a la siguiente moción que presenta el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por la que se insta al Gobierno a presentar un plan de financiación, en dos anualidades, de las necesidades municipales que aún están por cubrir en los

distintos planes de emergencia nuclear existentes en el Estado español.

Tiene la palabra el Senador Joan Roig i Grau.

El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ha presentado esta moción y alguna de sus señorías podría pensar que es una obviedad porque en ella se insta al Gobierno a acabar los planes de emergencia nuclear que afectan a diferentes provincias del Estado español. Y digo que puede parecer una obviedad porque estamos hablando de centrales nucleares como las de José Cabrera, en Guadalajara, puesta en marcha en el año 1968, Trillo, también en Guadalajara, año 1988, Cofrentes en Valencia, 1984, Santa María de Garoña, en Burgos, 1970, Almaraz I y II, en Cáceres, año 1985, Ascó I y II, en Tarragona, 1984 y 1986, y Vandellós II, en Tarragona, año 1988.

Pues bien, señorías, todas estas centrales nucleares, productoras de energía eléctrica, absolutamente necesarias para garantizar el suministro eléctrico al país, no cuentan aún con la totalidad de los planes de emergencia nuclear.

Evidentemente, éste no es el debate sobre la conveniencia o no del modelo de producción eléctrica nuclear. La realidad incuestionable es que las centrales nucleares están aquí, y que en territorios como al que yo pertenezco, Tarragona, hay una extraordinaria densidad de centrales nucleares en varias de sus comarcas sin que por parte del Estado, y después de veinte años de funcionamiento de dichas centrales, después de las constantes, tenaces y rigurosas reivindicaciones por parte de la AMAC, la Asociación de Municipios Afectados por Centrales Nucleares, después de todo esto, no se hayan acabado las infraestructuras que proponen los respectivos planes de emergencia.

Señorías, el debate que en estos momentos se plantea en relación a las centrales nucleares está enmarcado en las posibles soluciones para eliminar, reducir o almacenar los residuos nucleares generados por su explotación, y en este sentido existe ya una Ponencia en el Senado que estudia todo este tema de los residuos.

Éste es un tema que preocupa mucho. Sin embargo, da la impresión de que toda la problemática que envuelve a los centros de producción, y que después de algunos años aún no se ha resuelto, no interesa demasiado por estar más pendientes de otro estadio, el de los residuos.

Existen en el Estado español cinco planes de emergencia nuclear, uno por provincia, entre ellas las referenciadas con anterioridad que no repetiré ahora. Todos ellos se aprobaron por el Gobierno en el año 1990 y se redactaron en función del Plan Básico de Emergencia Nuclear aprobado en Consejo de Ministros en el año 1989.

Los planes de emergencia nuclear prevén dos zonas de actuación: la zona 1, a 10 kilómetros de la central, zona de evacuación y confinamiento de la población, y la zona 2, a 30 kilómetros, zona de control de alimentos. Los PEN prevén, además, que cada municipio tenga su

propio plan para emergencias nucleares, el PAMEN, planes que han sido redactados en su totalidad por la Dirección General de Protección Civil y aprobados por los municipios. Sobre la base de estos planes se han definido las necesidades mínimas de cada municipio incluido en la zona 1 de los planes de emergencia, y en función de ésta se han comprobado las necesidades que están pendientes de cubrir, es decir, lo que en ese argot se llaman las carencias.

Estas carencias se clasifican en tres categorías: A, B y C. Las de tipo A, que se pueden cuantificar en unos 300 millones de pesetas y que afectan a municipios de la zona 1, están siendo básicamente cubiertas por el Estado a través de sus presupuestos ordinarios. Por tanto, no ofrecen problemas. Son las carencias del tipo B, que corresponden básicamente a caminos de enorme importancia porque están incluidos como rutas de evacuación de la población, y que están cuantificadas aproximadamente en 4.000 millones de pesetas, las que no disponen de presupuestos para su ejecución. Otras necesidades materiales de carácter específico tipo C, también correspondientes a municipios de la zona 1, cuantificadas en 1.500 millones de pesetas y que se refieren a otras infraestructuras totalmente necesarias, si bien no tan prioritarias como las anteriores, tampoco tienen prevista la financiación. (*El señor Vicepresidente Aguilar Belda ocupa la Presidencia.*)

Finalmente, creo que es necesario hacer referencia a los convenios de carreteras firmados en el año 1990 con una previsión de ejecución de tres años. Dichos convenios, que fueron firmados por los Ministros de Interior y Fomento —MOPU en aquel momento—, por las Consejerías de Obras Públicas de los respectivos Gobiernos autonómicos y por las Diputaciones provinciales, no se han cumplido en su totalidad y, por tanto, quedan pendientes de mejoras o de construcción muchas carreteras comprendidas en el ámbito de actuación de los planes de emergencia nuclear.

En resumen, señorías, lo que pretendemos desde Convergència i Unió con esta moción es impulsar definitivamente la ejecución de los planes de emergencia pendientes aún de realizar.

Creemos sinceramente que en esta Cámara deberíamos en este momento, a finales ya de 1997, estar discutiendo planes de dinamización económica y de alternativas socioeconómicas para estas zonas. De hecho, en la Ponencia que está estudiando este tema existe el compromiso de incorporar por ley finalmente en las resoluciones la necesidad o la obligación de ejecutar estos planes, de discutir estos planes de dinamización económica y de creación de alternativas socioeconómicas para los habitantes de estas zonas, que corren el riesgo de desertizarse cuando acabe la vida de las centrales.

Pero lo que pretendemos con esta moción y pedimos que apruebe la Cámara es un impulso para la realización de los planes de emergencia nuclear, que den respuesta a las necesidades de los habitantes de estas zonas en hipotéticos casos de accidente. En este sentido, pido el voto favorable de toda la Cámara.

Gracias, señor Presidente, y gracias, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Roig i Grau.

A esta moción se presentó una enmienda del Grupo Popular; pero, con posterioridad, se ha presentado una enmienda transaccional firmada por todos los grupos parlamentarios. Por tanto, entiendo que no caben turnos a favor y en contra de la citada transaccional, por lo que pasaríamos directamente al turno de portavoces. ¿Hay alguna objeción? (*Pausa.*)

Así pues, abrimos el turno de portavoces.

Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Albístur.

El señor ALBÍSTUR MARÍN: Gracias, señor Presidente.

Poco hay que decir, porque el objeto de la moción está lo suficientemente claro en su exposición de motivos. El problema es preciso y concreto, y las necesidades que hay que cubrir, evidentes.

Existiendo una Ponencia en el Senado que está estudiando toda la problemática que supone la producción de energía eléctrica a partir de la energía nuclear, así como todo lo relativo al riesgo de los residuos nucleares y a los incentivos para las zonas donde están ubicadas las centrales y los supuestos depósitos de los materiales consumidos, nos parece grave que este tema todavía no se haya resuelto; sobre todo, en lo que afecta a las vías de comunicación, planes de simulacro o de emergencia, información a la población, mejora de infraestructuras, formalización de protocolos, y procedimientos para atender las posibles emergencias en caso de accidente.

Consideramos que este es un tema que debe ser considerado como preferencial, en función de que el dominio absoluto de esta materia no está en manos del hombre ni de la técnica. Materia que, además según un reciente informe del CIS que nos ha sido entregado, todavía supone una importante preocupación para la población, por las consecuencias que de ella pueden derivarse.

Por tanto, daremos nuestro voto favorable a la iniciativa planteada por el Grupo de Convergència i Unió, insistiendo en la necesidad de instar al Gobierno para que presente este plan de financiación lo más rápidamente posible, de acuerdo con la enmienda transaccional acordada por todos los grupos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Albístur.

Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Roig.

El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor Presidente.

Paso a fijar la posición de nuestro Grupo en relación con la enmienda transaccional que se ha presentado y que, como es lógico, vamos a aceptar, puesto que la hemos firmado.

Si bien la propuesta final no nos satisface plenamente porque no concreta los plazos de ejecución de los planes

de emergencia nuclear, se acepta impulsar y financiar el nivel B de carencias, lo que sin duda es lo más prioritario, y nuestro objetivo al presentar la moción.

En el anterior Pleno, y con motivo del debate de una moción presentada por el Grupo Socialista sobre la dinamización y el desarrollo económico de las zonas nucleares, un Senador hizo referencia al emplazamiento de las centrales nucleares en zonas rurales, alejadas de los grandes núcleos de población.

Aunque ello sea relativamente cierto, no lo es menos que los ciudadanos de estas zonas tienen todo el derecho a su seguridad y a la solidaridad de la Cámara y del Estado. En este sentido, entendemos que esta enmienda transaccional —que, vuelvo a repetir, no satisface plenamente nuestra ambición desde el punto de vista del texto que habíamos presentado— representa un avance importante en la solución de este tema. Por tanto, la votaremos favorablemente.

Gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Roig i Grau.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Sánchez Lucas.

El señor SÁNCHEZ LUCAS: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, coincido con las últimas palabras de esta intervención del señor Roig. No nos satisface totalmente, aunque también, en aras de avanzar en un tema que en los últimos años parece que está un poco parado, valía la pena hacer este esfuerzo, especialmente porque en la transaccional se remite a los planes de emergencia nuclear, donde se pactan las ayudas de acuerdo con el informe sobre las necesidades de tipo b), redactado por Protección Civil junto con la AMAC.

No voy a repetir los planes nucleares, que ya saben que afectan a las siete centrales, especificadas por el Senador Roig. Simplemente, para información de los señores Senadores que no estén muy al corriente de esta problemática, diré que la Zona 1, para la que se pide ayuda, es la que tiene un radio de 10 kilómetros, considerada de alto riesgo y que, a su vez, se subdivide en tres subáreas: a) Hasta tres kilómetros, que requiere en caso de accidente nuclear la evacuación total de la población. b) hasta cinco kilómetros, que requiere la evacuación de grupos críticos, enfermos, gente mayor, niños, y la c), hasta 10 kilómetros que, entre otras medidas, requiere el confinamiento.

La financiación de los planes de emergencia desde su creación se dividieron en dos apartados: un plan de financiamiento de cantidades inferiores a 20 millones y otro de presupuestos superiores a 20 millones. Inicialmente el primer apartado se articulaba a través de convocatorias en el «BOE» y a partir del año 1994 se llega a un acuerdo de Protección Civil con los ayuntamientos y municipios afectados que se hace vía convenio.

En el segundo bloque hay un convenio interministerial, al que también ha hecho referencia el Senador Roig

y, por tanto, no lo repetiré. Se contó en principio en un tanto alzado unos 10.000 millones y se prevé que se acerque a los 15.000 millones. El grado de cumplimiento de este programa es suficientemente aceptable de media, pero no en algunas zonas. Tiene un grado de ejecución de un 75 u 80 por ciento, pero hay alguna zona deficitaria: algo en la provincia de Tarragona, lo que afecta a las centrales de Ascó y Vandellós, bastante en la de Cáceres y mucho en la de Burgos, que es la más atrasada en la realización de estos planes. Me refiero al bloque del acuerdo interministerial, Comunidades Autónomas y Diputaciones.

Nuestro Grupo cree que esta moción se ha rebajado bastante en algunos aspectos y nos preocupa. El primero, es que tenemos cierta duda en su efectividad, por su poca concreción en aspectos a los que también se ha referido el Senador Roig, como la cantidad —de la que no se habla, que es de 6.000 millones— y el tiempo.

Entendemos que cuando la transaccional hace referencia al acuerdo de las necesidades de tipo b) entre Protección Civil y la AMAC, ¿se mantienen los 6.500 millones, que es lo que valoramos?, o ¿serán las administraciones, obligadas por esta transaccional, Comunidades Autónomas, Diputaciones, a hacer frente a esta cantidad? Algo tendrán que decir y tampoco sabemos si han sido consultadas.

El tiempo tampoco se especifica en la moción. Se dice que el plazo es de dos años o de dos ejercicios, pero no dice cuándo, si es en 1998 o en 1999. Pensamos que es un error susceptible de corregir.

Hay un tema importante. Creemos que en este caso hay una cierta dejadez de la competencia del Gobierno porque se rompe una línea que, a través de los Presupuestos Generales del Estado, desde 1990 venía dotando a estos planes de emergencia, por medio Ministerio del Interior y, concretamente, de Protección Civil, de una partida de 500 millones de pesetas, en 1991. En los años 1992-1993 igualmente es de 500 millones de pesetas. En el año 1994, 350 millones de pesetas e igual cantidad para 1995. Después del año 1996, cuando cambió el Gobierno, es cierto que no se dotó, pero en el período del año 1991 al año 1996 hay 2.200 millones de pesetas, que representan 366 millones de pesetas de media por ejercicio directo de los presupuestos. En 1997, 150 millones y en 1998 parece ser que también 150 millones. Desde este punto de vista, ha bajado más de la mitad la dotación que se venía produciendo.

Creo que todos estos temas están pendientes. En un principio hubiésemos votado en contra, porque no se ajustaba a la moción, pero nos hemos puesto en contacto con personas de los municipios afectados, y estas personas entendían que era lanzar algo, como también ha explicitado el Senador Roig. Por ello, se nos pedía que no fuésemos excesivamente exigentes. Con lo que sí vamos a ser exigentes es con el seguimiento de este tema.

Todos tenemos pérdidas de memoria más o menos intensas; pero hay una que choca a este Senador. Hace 15 días, para justificar el voto en contra a nuestra moción, se nos remitía a la Ponencia de residuos radiactivos, enten-

diendo que no era un tema específico y que tenía que tratarse en dicha Ponencia. En cambio, en este caso, parece que no hay ninguna objeción a que no vaya a esta Ponencia, con la excepción del señor Albístur, que ha pedido que se le dé el mismo tratamiento que a la moción del Grupo Socialista. Por tanto, entendemos que quedan muchas cosas en el aire y que hay que seguirlas muy de cerca. Nosotros no pediremos, como es lógico, que se trate en la Ponencia de residuos radioactivos. Creemos que ésta tiene otra exigencia.

Para terminar, diré que votaremos esta moción para que estas zonas de riesgo tengan el máximo de recursos para que, en caso de accidente, se puedan desarrollar los planes de emergencia con total garantía de cumplimiento para asegurar la protección de la población que tiene un riesgo real, aunque aparentemente esté controlado, para que todos y cada uno de los municipios y sus respectivos ayuntamientos sepan que el resto de la sociedad y sus instituciones públicas son solidarias y corresponsables de su seguridad, y en el caso de las Cortes Generales velaremos para que así sea, porque los gobiernos socialistas desde 1990 dotaron a estos planes suficientemente y fueron especialmente impulsados por la Directora General de Protección Civil, Pilar Bravo.

Finalmente, sobre el tema de la moción, desearía decir, señorías, en nombre propio, por ser Senador de una provincia, Tarragona, con una notable concentración de centrales nucleares y del Grupo Socialista al que represento, que se dé respuesta positiva a las peticiones de la AMAC y que se mejoren al máximo los recursos para que el plan sea cien por cien efectivo, y desear, aún con más énfasis si cabe, que este plan, como los demás de prevención de riesgos, sea eficaz y no podamos comprobarlo nunca.

Gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Sánchez.

Tiene la palabra, por el Grupo Popular, el Senador Tomey.

El señor TOMEY GÓMEZ: Gracias, señor Presidente.

Efectivamente, las siete centrales nucleares que hay en el territorio español se encuentran en cinco provincias: Burgos, Cáceres, Guadalajara, Tarragona y Valencia, algunas de ellas, ya de por sí de escasa demografía. Sobre todo las de Santa María de Garoña, Almaraz, Trillo, Zorita, Vandellós, Ascó y Cofrentes están en zonas de estas características.

Son estos lugares y su entorno, lo han sido por lo menos, no sólo de escasa población, sino con grandes carencias en materia de infraestructuras, cuya ejecución sobrepasa, en la mayoría de los casos, los insuficientes recursos municipales. La entrada de las centrales nucleares en estas zonas rurales ha supuesto un cambio social y de estructuras económicas difícil de asimilar para la población que ha sufrido ese cambio en poco tiempo.

A ello han de unirse los sentimientos de solidaridad hacia esas zonas, que deben ser objeto de tratamiento y

cuidado especial por parte de las administraciones públicas, que deben contemplar esos municipios y los de su entorno bajo diversos aspectos que pueden ir desde la seguridad de la zona para casos de emergencia —y todos tenemos y debemos tener gran sensibilidad en los temas de seguridad nuclear— a los de ayuda necesaria para la creación de riqueza, de tal forma que exista una alternativa a la que la central nuclear pueda generar, pasando también por los aspectos culturales, sociales, sanitarios y deportivos.

Por ello, se aprobó en su momento la Ley sobre el canon energético, que permitía a las Diputaciones provinciales redactar planes específicos de las zonas que pudieran considerarse afectadas por la misma y que paliaron muchas deficiencias en los pocos años en que estuvo viva esta Ley sobre canon, ya que fue derogada, igual que la de Tráfico de Empresas, por la entrada del IBI. Posteriormente, en 1989, se aprobó el Plan básico de emergencia nuclear, y posteriormente, en 1990, se aprobaron los correspondientes planes por el Ministerio del Interior para las cinco provincias afectadas, habiéndose producido desde entonces importantes inversiones, canalizando subvenciones o promoviendo convenios de colaboración entre ministerios diversos, Comunidades Autónomas, Diputaciones y ayuntamientos, en cuantía aproximada a la que a continuación voy a señalar: 4.080 millones para equipamientos y material, 3.300 millones para necesidades derivadas de la implantación de los planes municipales de emergencia nuclear, 914 millones para extensión del servicio telefónico, 20.000 millones para la financiación y ejecución de redes viarias provinciales —algunas ya están concluidas y otras en fase de ejecución mediante convenios con las administraciones públicas— y 1.500 millones de pesetas para implantar una red de detección de alta radiactividad. ¿Quiere decir, señorías, que con estos casi 30.000 millones de pesetas tienen los 70 municipios del entorno de las siete centrales nucleares los problemas de infraestructura resueltos? Verdaderamente no. Por ello, la Dirección General de Protección Civil, con la participación de la Agrupación de Municipios Afectados, AMAC, ha elaborado un documento para definir los municipios de la zona I, que ya ha sido definida, identificando y valorando las necesidades planteadas en tres categorías. Las necesidades de tipo A, que no existirían en estos municipios de no existir la central, cuya valoración asciende, en lo que resta por hacer, a 308 millones aproximadamente. El Ministerio del Interior ha asumido el compromiso de llevarlas a cabo en tres años de acuerdo con los recursos presupuestarios, y en los Presupuestos de este año figura una partida importante para ello. Después están las necesidades de tipo B, que afectan fundamentalmente a viales y carreteras, y que son necesarias con independencia o no de que exista la central nuclear. Esto tiene una valoración aproximada de 6.400 millones de pesetas. Y por último, las necesidades de tipo C, que sin influir en la operatividad de los planes, sí contribuirían al mejor desarrollo de la zona, y su valoración asciende aproximadamente a 1.500 millones de pesetas. El Ministerio del Interior no asumió ningún compromiso respecto

a las necesidades de tipo C, y sí su voluntad de apoyar ante el conjunto de las administraciones públicas las del grupo B. Por eso, consideramos muy importante la moción presentada por el Senador Roig i Grau, en nombre del Grupo de CiU en el Senado, ya que estimamos la importancia que han tenido para esas zonas los diversos planes establecidos, hechos todos ellos con la colaboración de todas las administraciones públicas. *(El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)*

En gran medida, señores Senadores, muchos de los viales, de las carreteras, dada nuestra descentralización, ya dependen de las Comunidades Autónomas y muchas también dependen de las Diputaciones provinciales y, en algunos casos, de los municipios.

Me gustaría, como Senador por Guadalajara y Presidente de su Diputación, poner como ejemplo los Pengua de Trillo y de Zorita, en los que participaron los Ministerios del Interior, Administraciones Públicas, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de Guadalajara. Las obras que comprendían los convenios firmados en su día en los años 1988 y 1990 están totalmente finalizadas en la actualidad. Por eso ha sido una ampliación de infraestructuras, una reposición de determinadas infraestructuras, un mejor equipamiento de las zonas de los PEN el origen del documento que determina la presentación de la moción por parte de CiU.

Por ello, aun estando totalmente de acuerdo con el fondo de la moción, habíamos presentado una enmienda que, a la vez, ha sido consensuada por todos los grupos y agradecemos a CiU su aceptación, ya que en ella se solicita pedir el esfuerzo no sólo a los Presupuestos Generales del Estado, que todos, y más en estos momentos, debemos cuidar, sino al resto de las administraciones públicas, al igual que ha sucedido en los planes de emergencia anteriores que se realizaron con estas participaciones.

En este sentido iban las conversaciones que el Ministerio del Interior ha mantenido con la AMAC y también, como decimos, la enmienda transaccional, para que el Senado inste al Gobierno a proceder, en colaboración con las restantes administraciones públicas implicadas, a la valoración y financiación de la cobertura de las necesidades precisas para mejorar la operatividad de los planes de emergencia de acuerdo con el informe sobre necesidades de tipo B redactado por Protección Civil.

Seguramente en esa valoración ha quedado algún municipio de alguna de las centrales aún sin incluir porque no mandaron la documentación a tiempo, etcétera, o alguno porque ya se ha realizado la obra y necesita otro tipo de adecuación, pero el documento base...

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, se le terminó el tiempo hace un ratito.

El señor TOMEY GÓMEZ: Sí, señor Presidente.

De todas formas, se tiene que basar en ese documento porque está perfectamente realizado.

Por tanto, creemos que es de justicia cubrir las carencias de esas infraestructuras, porque han estado muchos años marginados y han pasado a ser conocidos muchas veces sólo por la ubicación en ellos de una central nuclear. De ahí que pidamos y esperemos el voto afirmativo de todos los grupos a esta moción.

Muchas gracias, señor Presidente. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Tomey.

Por las intervenciones habidas y por la enmienda transaccional, creo que puedo proponer que sea aprobada por asentimiento.

¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (*Pausa.*)

Queda aprobada.

CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

— DECLARACIÓN PREVISTA EN EL ARTICULO 14 DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL (NUEVA YORK, 7 DE MARZO DE 1966) SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 610/000139) (C. D. 110/000140).

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El quinto y último punto del orden del día de hoy es conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados.

El primero es la aclaración prevista en el artículo 14 de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, hecha en Nueva York el 7 de marzo de 1966.

El Senador Cobo tiene la palabra.

El señor COBO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, la Declaración que hoy tratamos es para reconocer la competencia del Comité Especial Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial para que pueda acoger recursos o comunicaciones y entender de ellos, siempre que el español o el grupo de españoles encargados hayan agotado el recurso a nuestro sistema jurisdiccional y lo hagan en el plazo de tres meses.

En la Declaración que aprobamos no está expresa la posibilidad de poder recurrir a dicho Comité sin agotar la vía jurisdiccional española porque se haya producido una dilación injustificada.

Nosotros vamos a aprobar esta Declaración, pero entendemos, sin embargo, que, sin estar expresa, sí está aceptada implícitamente esta posibilidad que se contempla en la Convención Internacional.

Hoy no aprobamos la creación de un comité español contra el racismo, posibilidad que ofrece la Convención Internacional, por entender que es suficiente nuestro ordenamiento jurisdiccional, pero hoy lo aceptamos. Mañana puede que sea conveniente pensar en su creación, posibilidad que podemos contemplar en el futuro y que nos reservamos.

Algunas normas por ellas mismas pueden ser eficaces sólo con su promulgación. Esta declaración no es el caso. Sólo una actitud general que informe todas las políticas y todos los comportamientos puede hacer verdad aquello de hacer desaparecer todas las formas de racismo que hay en el mundo.

Porque sucede muchas veces que, al igual que la economía, o las discusiones sobre economía, ocultan la política, las intenciones políticas, a veces el racismo no hace sino ocultar las injusticias y las opresiones. A veces el racismo no es sino un seudónimo de la injusticia.

Este paso que hoy damos en el Senado es un paso importante para la comunidad internacional. Hoy España da un paso importante —todos sabemos que se aprobó en el año 1966 y España se adhirió a los tres años—, pero un paso que no debe ocultar la absoluta diferencia de oportunidades entre los ciudadanos del mundo: el racismo, presente también en nuestra sociedad. Usemos esta técnica, usemos el Convenio Internacional, pero seamos conscientes de que son muchos los esfuerzos para superar todas las formas de exclusión social, y la racista es una de ellas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cobo Fernández.

Tiene la palabra don Roberto Soravilla.

El señor SORAVILLA FERNÁNDEZ: Gracias, señor Presidente.

El motivo de que intervengamos en este trámite, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, no es tanto la Declaración en sí —siendo ella importante— como el fondo de la misma, y también el momento en el que se produce.

Con respecto al fondo, señorías, considero que es poner nuevamente de manifiesto el compromiso —no sólo de mi Grupo, sino, sin duda, del de toda la Cámara—, con la defensa de los derechos humanos y nuestra repulsa —repulsa de todos— muy en particular a cualquier tipo de racismo.

Además, la oportunidad coincide precisamente con el último mes, el mes de diciembre, del Año Europeo contra el Racismo, que era el de 1997. Hoy, que hemos estado en esta Cámara debatiendo sobre las Humanidades —hemos debatido sobre la Historia y nuestra fértil pluralidad—, diré no España, sino las Españas de las tres culturas, esas Españas criollas y de mestizaje, forman parte, como sus señorías saben, del artículo 14 de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial de Naciones Unidas desde que entró en vigor en enero del año 1969.

La Declaración prevista, como el Senador Zamorano ha hecho referencia, y para la que se nos solicita la autorización, supone reconocer la competencia del Comité

para la eliminación de la discriminación racial para recibir y considerar comunicaciones individuales o colectivas de personas de la propia jurisdicción que aleguen ser víctimas de violaciones de los derechos contenidos en la Convención. Es verdad que tienen que agotar la propia vía nacional, y creemos que con las leyes que tenemos vigentes, por lo menos de momento, sería suficiente y esperamos que lo siga siendo.

Como bien conocen sus señorías, el hecho de que España acepte este tipo de competencias no es nuevo; lo hicimos ya en el caso del Comité de los Derechos Humanos, y la de hoy es simplemente la reafirmación en este campo del firme compromiso —como ya he señalado— de que mi Grupo va a apoyarla sin ningún tipo de reserva y, además, con el valor simbólico de hacerlo en este Año Europeo contra el Racismo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Soravilla.

Si no hubiera petición de intervenciones, ¿podría considerarse aprobado por asentimiento? (*Pausa.*)

Así es, así consta y, por lo tanto, queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto la Declaración prevista en el artículo 14 de la Convención Internacional.

— CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE HAITÍ, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN PUERTO PRÍNCIPE EL 8 DE MAYO DE 1991, Y CANJE DE NOTAS DE 4 Y 16 DE OCTUBRE DE 1995 QUE LO MODIFICA (S. 610/000118) (C. D. 110/000117).

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Convenio Básico de Cooperación Científico-Técnica entre el Reino de España y la República de Haití, firmado «ad referéndum» en Puerto Príncipe el 8 de mayo de 1991, y Canje de Notas de 4 y 16 de octubre de 1995 que lo modifica.

¿Algún Senador desea intervenir? (*Pausa.*)

¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (*Pausa.*)

Así es y, por lo tanto, se autoriza en este acto el Convenio Básico de Cooperación Científico-Técnica entre el Reino de España y la República de Haití.

— PROTOCOLO SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE MINAS, ARMAS TRAMPA Y OTROS ARTEFACTOS (PROTOCOLO ENMENDADO II), ADOPTADO EN GINEBRA EL 3 DE MAYO DE 1996, DE LA CONVENCIÓN SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES QUE PUEDAN CONSIDERARSE EXCESIVAMENTE NOCIVAS O DE EFECTOS INDISCRIMINADOS DE 1980 (S. 610/000119)(C. D. 110/000118).

El señor PRESIDENTE: El siguiente protocolo trata sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos (Protocolo enmendado II), adoptado en Ginebra el 3 de mayo de 1996, de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados de 1980.

Tiene la palabra don Roberto Soravilla.

El señor SORAVILLA FERNÁNDEZ: Gracias, señor Presidente.

El Grupo Popular lo que desea es subrayar con el mayor énfasis la trascendencia que concedemos a la autorización por la Cámara para que el Gobierno firme este Protocolo II enmendado, y ya me referiré también al siguiente, que tendremos que aprobar, que es el Protocolo IV, relativo a las armas láser cegadoras, de la Convención de 1980, conocida como Convención de armas dañinas, como si algunas no lo fueran, aunque la verdad es que éstas, las minas antipersonas, lo son muy especialmente, y lo queremos resaltar, además, cuando faltan unas horas para la firma del Tratado de Otawa.

El Grupo Popular está, no sólo a favor de este tratado, sino de la prohibición total, y este Protocolo II lo consideramos un paso importante para la erradicación del uso de las minas contrapersonas y otras armas trampa. Sabemos todos, señorías, la crueldad indiscriminada de semejantes artefactos, cuyos resultados de muerte o de graves mutilaciones físicas, y no menos graves consecuencias psíquicas, nos muestran con dura crudeza los medios de comunicación o exposiciones como la que hay en el Circolo de Bellas Artes, o en algunos casos hemos comprobado personal y directamente a quienes nos toca visitar zonas en conflicto, como Bosnia, sin ir más lejos, ni siquiera en la distancia ni en la participación de nuestros compatriotas. Allí y en todas las latitudes, porque están en todos los continentes, hemos visto incluso campos férciles sin posibilidad de ser cultivados, agravando aún más la pobreza de aquellos países por la simple y siniestra razón de que estos perversos artefactos, sembrados de odio y con odio, mantienen ciegos una guerra sorda, olvidados de la concordia y la paz de los hombres y de los inocentes.

A pesar de que nuestra situación geoestratégica —y quisiera resaltar este aspecto— no es precisamente la más cómoda —recuerdo simplemente que en Europa hay países como Finlandia y Grecia que van a mostrar, precisamente por su situación geoestratégica, alguna reserva—, puedo decir que España —y quisiera subrayarlo también— siempre ha trabajado en el esfuerzo por la prohibición de estas armas dañinas, a cuya Convención nos adherimos en el año 1994, al tiempo que adoptamos medidas restrictivas para su comercio y exportación, siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas y de Cruz Roja Internacional. Moratoria que, sin período de transición, como suele ser habitual, convertimos en indefinida tras la acción común europea de 1995, que incluye la ratificación precisamente de este Protocolo que ahora

nos ocupa por todos sus miembros, con el compromiso añadido de promoverla para el resto de los países.

En la Conferencia de Ottawa —también quisiera subrayarlo— del pasado octubre, España no sólo participó de una manera muy activa, sino que suscribió la declaración final, precisamente a la espera de poder firmar un tratado definitivo para la prohibición total, que, desde luego, el Grupo Popular y el Gobierno al que sustenta desearían que tuviera un carácter vinculante, que fuera verificable y que tuviera un ámbito universal, porque la Convención de 1980 —quiero recordarlo— sólo ha conseguido 25 ratificaciones, y el inminente Tratado de Ottawa necesitará 40 ratificaciones para poder entrar en vigor.

Señorías, mi Grupo va a apoyar la autorización para la firma de este Protocolo II y para el del IV, como he dicho, de armas láser cegadoras, en su calidad de serio avance hacia la prohibición, con logros muy concretos, pues si bien sólo se alcanza en él a las minas terrestres, se ha conseguido incluir la prohibición de su uso también en conflictos internos, y en todos los casos quedan prohibidas aquellas minas que no sean detectables y que no sean autodestruibles, lo que incluye, naturalmente, su fabricación y comercio.

Quisiera decir que ahora se fabrican las minas en plástico para no ser detectables y que pueden durar hasta cincuenta años activas. En Alemania todavía hay minas de la II Guerra Mundial activas, resulta un arma muy barata y muy destructiva porque nada más cuesta la vida de los seres humanos —nada menos—. Es cierto que por el momento no se logra un acuerdo de verificación, pero se establece un régimen de sanciones penales por incumplimiento, y España reafirma, como todos los demás países, su compromiso, además de ayuda económica y técnica para las dificultosas labores de desminado.

Por último, señorías, queremos adherirnos, con motivo de este trámite, a las manifestaciones por la prohibición total que ya se han hecho en la Cámara Baja, que se han hecho por y desde toda la sociedad, mostrar nuestra solidaridad más profunda e intensa a tanta víctima inocente, y no sólo votar por la autorización de la firma de este Protocolo por el Gobierno, sino respaldar la firma del Tratado de Ottawa y animarle a que se erija en uno de los principales promotores por la prohibición total, y sobre todo que persevere en ella.

Muchas gracias, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Soravilla.

¿Hay alguna otra petición de palabra? (*Pausa.*)

Propongo que sea aprobado por asentimiento. (*Pausa.*)

Así es, así consta y, por tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos (Protocolo enmendado II), adoptado en Ginebra el 3 de mayo de 1996.

— PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES QUE PUEDAN CONSIDERARSE EXCESIVAMENTE NOCIVAS O DE EFECTOS INDISCRIMINADOS, «PROTOCOLO SOBRE ARMAS LÁSER CEGADORAS», PROTOCOLO IV, ADOPTADO EN VIENA EL 13 DE OCTUBRE DE 1995 (S. 610/000120) (C. D. 110/000119).

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Protocolo adicional a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, «Protocolo sobre armas láser cegadoras», Protocolo IV, adoptado en Viena el 13 de octubre de 1995.

No hay petición de palabra. Propongo que sea aprobado por asentimiento. (*Pausa.*)

Por este acto se autoriza la aceptación del Protocolo adicional mencionado.

— ENMIENDA AL ARTÍCULO 15 DEL ACUERDO DE EXPLOTACIÓN RELATIVO A LA ORGANIZACIÓN EUROPEA DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE (EUTELSAT), ADOPTADA EN PARÍS EL 21 DE FEBRERO DE 1996 (S. 610/000121) (C.D. 110/000120).

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente es una enmienda al artículo 15 del Acuerdo de explotación relativo a la Organización Europea de Telecomunicaciones por Satélite (EUTELSAT), adoptada en París el 21 de febrero de 1996.

No se han presentado enmiendas, tampoco hay petición de palabra. Propongo que sea aprobado por asentimiento. (*Pausa.*)

Se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento a esta enmienda.

— CONVENIO EUROPEO SOBRE TELEVISIÓN TRANSFRONTERIZA, HECHO EN ESTRASBURGO EL 5 DE MAYO DE 1989 (S. 610/000122) (C. D.110/000121).

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Convenio Europeo sobre televisión transfronteriza, hecho en Estrasburgo el 5 de mayo de 1989.

No hay enmiendas, tampoco hay petición de palabra. Propongo que sea aprobado por asentimiento. (*Pausa.*)

Así es y, por tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento a este Convenio Europeo sobre televisión transfronteriza.

- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE ISLANDIA AL CONVENIO DE LA HAYA SOBRE ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES (LA HAYA, 25/10/80) (S. 610/000123) (C. D. 110/000124).

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente es la Declaración de Aceptación por España de la adhesión de Islandia al Convenio de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (La Haya, 25/10/80).

No hay enmiendas, no hay petición de palabra. Propongo que sea aprobado por asentimiento. (*Pausa.*)

Así es, así consta y, por tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento a esta Declaración de aceptación.

- CONVENIO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS, FIRMADO EN MADRID EL 30/05/97 (S. 610/000124) (C. D. 110/000125).

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Convenio de extradición entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado en Madrid el 30/05/97.

No hay enmiendas, tampoco hay petición de palabra. Propongo que sea aprobado por asentimiento. (*Pausa.*)

Así es, así consta y, por tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento a este Convenio de Extradición entre el Reino de España y el Reino de Marruecos.

- CONVENIO RELATIVO A LA ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS, FIRMADO EN MADRID EL 30/05/97 (S. 610/000125) (C. D. 110/000126).

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado en Madrid el 30 de mayo de 1997.

No hay enmiendas, no hay petición de palabra. Propongo que sea aprobado por asentimiento. (*Pausa.*)

Así es, así consta y, por tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento a este Convenio.

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS RELATIVO A LA ASISTENCIA DE PERSONAS DETENIDAS Y AL TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS, FIRMADO EN MADRID EL 30 DE MAYO DE 1997 (S. 610/000126) (C. D. 110/000127).

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la asistencia de personas detenidas y al traslado de personas condenadas, firmado en Madrid el 30 de mayo de 1997.

No hay enmiendas, tampoco petición de palabra. Propongo su aprobación por asentimiento. (*Pausa.*)

Así es, así consta y, por tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento a este Convenio.

- CONVENIO DE COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS, FIRMADO EN MADRID EL 30 DE MAYO DE 1997 (S. 610/000127) (C. D. 110/000128).

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Convenio de cooperación judicial en materia civil, mercantil y administrativa entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado en Madrid el 30 de mayo de 1997.

No hay enmiendas, tampoco petición de palabra. Propongo que sea aprobado por asentimiento. (*Pausa.*)

Así es, así consta y, por tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento a este Convenio.

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS SOBRE ASISTENCIA JUDICIAL, RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES EN MATERIA DE DERECHO DE CUSTODIA Y DERECHO DE VISITA Y DEVOLUCIÓN DE MENORES, FIRMADO EN MADRID EL 30 DE MAYO DE 1997 (S. 610/000128) (C. D. 110/000129).

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre asistencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia de derecho de custodia y derecho de visita y devolución de menores, firmado en Madrid el 30 de mayo de 1997.

No hay enmiendas, tampoco petición de palabra. Propongo su aprobación por asentimiento. (*Pausa.*)

Así es, así consta y, por lo tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento a este convenio.

- CONVENIO DE COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, FIRMADO EN BOGOTÁ EL 29 DE MAYO DE 1997 (S. 610/000129) (C. D. 110/000130).

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el convenio de cooperación judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de Colombia, firmado en Bogotá el 29 de mayo de 1997.

No hay enmiendas, tampoco petición de palabra. Propongo su aprobación por asentimiento. *(Pausa.)*

Así es y así consta y, por lo tanto, se autoriza en este acto a que el Gobierno pueda prestar su consentimiento a este convenio.

— TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, FIRMADO EN MADRID EL 10 DE MARZO DE 1997 (S. 610/000130) (C. D. 110/000131).

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República de El Salvador, firmado en Madrid el 10 de marzo de 1997.

No hay enmiendas, tampoco petición de palabra. Propongo su aprobación por asentimiento. *(Pausa.)*

Así es, así consta y, por lo tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento a este Tratado de Extradición.

— CONVENIO DE COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, FIRMADO EN MADRID EL 10 DE MARZO DE 1997 (S. 610/000131) (C. D. 110/000132).

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el convenio de cooperación judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de El Salvador, firmado en Madrid el 10 de marzo de 1997.

No hay enmiendas, tampoco petición de palabra. Propongo su aprobación por asentimiento. *(Pausa.)*

Así es y así consta y, por lo tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento a dicho convenio.

— CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS PARTE DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE Y LOS OTROS ESTADOS PARTICIPANTES EN LA ASOCIACIÓN PARA LA PAZ, RELATIVO AL ESTATUTO DE SUS FUERZAS Y PROTOCOLO ADICIONAL AL MISMO, HECHOS EN BRUSELAS EL 19 DE JUNIO DE 1995, ASÍ COMO RESERVA QUE EL GOBIERNO ESPAÑOL VA A FORMULAR EN EL MOMENTO DE SU RATIFICACIÓN (S. 610/000132) (C. D. 110/000133).

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el convenio entre los Estados Parte del Tratado del Atlántico Norte y los otros Estados participantes en la Asociación para la Paz, relativo al Estatuto de sus

Fuerzas y Protocolo Adicional al mismo, hechos en Bruselas el 19 de junio de 1995, así como reserva que el Gobierno español va a formular en el momento de su ratificación. *(El señor Román Clemente pide la palabra).*

El Senador Román Clemente tiene la palabra.

El señor ROMÁN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervengo para anunciar que votaremos en contra de este convenio.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

Sometemos a votación si autorizamos o no que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse, por medio del Convenio entre los Estados Partes del Tratado del Atlántico Norte y los otros Estados participantes en la Asociación para la Paz, relativo al Estatuto de sus Fuerzas y Protocolo adicional al mismo, hechos en Bruselas el 19 de junio de 1995, así como reserva que el Gobierno español va a formular en el momento de su ratificación. *(Pausa.)*

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a favor, 193; en contra, cuatro.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobado.

Por lo tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento a dicho convenio.

— ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE ALBANIA Y LOS GOBIERNOS DE LAS NACIONES CONTRIBUYENTES A LA FUERZA MULTINACIONAL DE PROTECCIÓN, RELATIVO AL ESTATUTO DE DICHA FUERZA, HECHO EN ROMA EL 21 DE ABRIL DE 1997 (S. 610/000133) (C. D. 110/000134).

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Acuerdo entre el Gobierno de la República de Albania y los gobiernos de las naciones contribuyentes a la Fuerza Multinacional de Protección, relativo al Estatuto de dicha Fuerza, hecho en Roma el 21 de abril de 1997.

No hay enmiendas. Tampoco hay petición de palabra. Propongo su aprobación por asentimiento. *(Pausa.)*

Así es y así consta. Por lo tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento a dicho acuerdo.

— ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR SOBRE TRANSPORTE AÉREO, FIRMADO EN MADRID EL 10 DE MARZO DE 1997 (S. 610/000134) (C. D. 110/000135).

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Acuerdo entre el Reino de España y la República de El Salvador sobre Transporte Aéreo, firmado en Madrid el 10 de marzo de 1997.

No hay enmiendas. Tampoco hay petición de palabra. Propongo su aprobación por asentimiento. (*Pausa.*)

Así es y así consta. Por lo tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento a dicho acuerdo.

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO MANZANAS, ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN MARTÍN DE PEDROSO (ESPAÑA) Y QUINTANILHA (PORTUGAL), FIRMADO EN MADRID EL 24 DE JUNIO DE 1997 (S. 610/000135) (C. D. 110/000136).

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Convenio entre el Reino de España y la República Portuguesa para la construcción de un puente internacional sobre el río Manzanas, entre las localidades de San Martín de Pedroso (España) y Quintanilha (Portugal), firmado en Madrid el 24 de junio de 1997.

No hay enmiendas. Tampoco hay petición de palabra. Propongo su aprobación por asentimiento. (*Pausa.*)

Así es y así consta. Por lo tanto, se autoriza en este acto a que el Gobierno pueda prestar su consentimiento a dicho convenio.

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO TÁMEGA, ENTRE LAS LOCALIDADES DE FECES DE ABAIXO (ESPAÑA) y VILA VERDE DA RAIA (PORTUGAL), FIRMADO EN MADRID EL 24 DE JUNIO DE 1997 (S. 610/000136) (C. D.110/000137).

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Convenio entre el Reino de España y la República Portuguesa para la construcción de un puente internacional sobre el río Támeaga, entre las localidades de Feces de Abaixo (España) y Vila Verde da Raia (Portugal), firmado en Madrid el 24 de junio de 1997.

No hay enmiendas. Tampoco hay petición de palabra. Propongo su aprobación por asentimiento. (*Pausa.*)

Así es y así consta. Por lo tanto, se autoriza en este acto a que el Gobierno pueda prestar su consentimiento a este convenio.

Anuncio a sus señorías que solamente faltan dos. (*Risas.*)

- CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y RUMANÍA SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL GOBIERNO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE RUMANÍA Y ANEXO, FIRMADO EN MADRID EL 10 DE ENERO DE 1980 (S. 610/000137) (C. D. 110/000138)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Canje de notas constitutivo de acuerdo entre España y Rumanía sobre la modificación del Convenio sobre transporte aéreo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la República Socialista de Rumanía y Anexo, firmado en Madrid el 10 de enero de 1980.

No hay enmiendas. Tampoco hay petición de palabra. Propongo su aprobación por asentimiento. (*Pausa.*)

Así es y así consta. Por lo tanto, se autoriza en este acto a que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del canje de notas constitutivo de acuerdo entre España y Rumanía.

- CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y URUGUAY SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO COMERCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, FIRMADO EN MONTEVIDEO EL 13 DE AGOSTO DE 1979 (S. 610/000138) (C. D. 110/000139).

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Canje de notas constitutivo de acuerdo entre España y Uruguay sobre la modificación del Acuerdo sobre transporte aéreo comercial entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay, firmado en Montevideo el 13 de agosto de 1979.

No hay enmiendas. Tampoco hay petición de palabra. Propongo su aprobación por asentimiento. (*Pausa.*)

Así es y así consta. Por lo tanto, se autoriza en este acto a que el Gobierno pueda prestar su consentimiento a dicho canje de notas.

Se levanta la sesión hasta mañana a las diez.

Eran las veinte horas y diez minutos.